



Un sector "con madera" para la paz:
El sector privado forestal
como socio en la construcción de la paz en Colombia

gtz



Departamento de Ciencia Política

Un sector “con madera” para la paz: El sector privado forestal como socio en la construcción de la paz en Colombia

© Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

Primera edición: octubre de 2006

ISBN: 958-97982-0-9

Con el auspicio de la Cooperación Técnica Alemana – GTZ

Programa Ambiental para Colombia

Coordinación editorial:

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

Peter Saile

Andrés Home

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

Barbara Hess

Directora de la Agencia GTZ en Bogotá

Programa Ambiental de la GTZ en Colombia

Peter Saile

Director

Autora

Angelika Rettberg, Ph.D

Directora del Programa de Investigación sobre Construcción de Paz (ConPaz)

Departamento de Ciencia Política

Universidad de los Andes

Bogotá – Colombia

Diseño editorial, diseño de portada, diagramación y corrección de estilo:

LYO Comunicaciones

Alfonso Ortega Soto

Alba Lucía Forero

Teléfono: 248 0106

e-mail: lyocomunicaciones@cable.net.co

Fotografía de portada:

Miguel Rodríguez Melo

Plantación de *Gmelina arborea*

Impresión

Panamericana

Formas e impresos S.A.

Nota aclaratoria:

Las posiciones, argumentos, datos y conceptos presentados en este documento son responsabilidad exclusiva de la autora y no comprometen a la GTZ.

Agradecimientos de la autora

Quiero expresar mis agradecimientos a todas las personas que facilitaron la recolección de información para este informe, empezando por varios ocupados empresarios y dirigentes gremiales que me dedicaron tiempo para responder las difíciles preguntas sobre actividad forestal, conflicto y construcción de paz en Colombia. Gracias también por facilitarnos datos a Víctor Nieto de la Corporación de Investigaciones y Fomento Forestal (Conif), a Gabriel Salas, del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República y a otros expertos que han preferido mantener su nombre en reserva. Finalmente, quiero dar las gracias a Stephanie Álvarez, estudiante de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, quien con su amable, diligente y rigurosa labor de asistencia, contribuyó a la culminación de este trabajo.

Contenido

Prólogo	9
I. Introducción	11
II. El marco conceptual: Recursos, conflictos, construcción de paz y sector privado	17
III. El sector forestal colombiano: testigo del conflicto armado y potencial socio en la construcción de paz	25
IV. Conclusiones	45
V. Bibliografía consultada	47

Prólogo

La GTZ, como otras agencias de cooperación bilateral y multilateral, ha reconocido la importancia de integrar al sector empresarial como uno de sus socios en el esfuerzo por contribuir al desarrollo político, económico, ecológico y social de los países en los que tiene presencia.

El Programa Ambiental de la GTZ en Colombia ha querido hacer evidente este reconocimiento institucional, facilitando diversos escenarios de intervención, particularmente con el sector privado forestal, por su cercanía temática.

Con el presente documento de reflexión y análisis, elaborado en asocio con la Universidad de los Andes, el Programa busca abrir un debate constructivo orientado a visibilizar al sector privado forestal como un actor importante que debe ser tenido en cuenta en las agendas de paz presentes y futuras en Colombia.

No está de más aclarar que las posiciones, argumentos, datos y conceptos presentados en esta publicación, son responsabilidad exclusiva de la autora y no comprometen las opiniones del Programa Ambiental de GTZ. Esperamos que este estudio sea la génesis de un ejercicio reflexivo de mayor profundidad e incentive el diálogo entre múltiples actores en pro del desarrollo sostenible y pacífico de Colombia.

Peter Saile
Director
GTZ Programa Ambiental

Andrés Home
Especialista de Programa
Cooperación con el Sector Privado

I. Introducción

El fin de la Guerra Fría expuso dramáticamente la extracción, distribución y comercialización de recursos naturales como combustibles de los conflictos armados internos a nivel mundial (Collier 2000, Collier y Hoeffler 2001, David Keen 2000, 2001, Berdal y Malone 2000). Desde entonces, académicos y funcionarios de diversas entidades internacionales han prestado atención a los mecanismos por medio de los cuales recursos naturales financian guerras, de manera directa (por medio de la explotación y comercialización del recurso con el propósito explícito de financiar combatientes) e indirecta (por medio de actividades económicas en zonas de explotación de recursos naturales que generan conflictos locales). Ante la acumulación de evidencia sobre los multifacéticos vínculos entre recursos naturales y guerra, diversas entidades como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial así como agencias de países específicos como la USAID (Estados Unidos), la AECI (España) y la GTZ (Alemania) han apuntado a la ruptura o, por lo menos, al debilitamiento de este vínculo, como un requisito fundamental para precipitar la superación de los conflictos armados y ambientar la construcción de paz en los países inmersos en conflictos armados internos.

Los ejemplos de la relación entre recursos naturales y conflictos armados abundan. En la República Democrática del Congo, la extracción de diamantes y su contrabando a través de las porosas fronteras africanas hacia las redes comerciales internacionales ha sido fundamental para sostener a los diferentes bandos armados (Global Witness 2000, 2004, 2006). En Angola, además de los diamantes, la explotación del petróleo sirvió a las fuerzas oficiales para sostener su lucha contra los rebeldes internos (Global Witness, 1998, 2002; Cilliers 2000). Sierra Leona y Liberia (Thomson y Kanaan 2003:1) sostuvieron hasta hace poco un activo intercambio de diamantes por armas, alimentando los conflictos internos de ambas naciones (Global Witness 2000, 2003, 2004).

Aunque la venta de madera para financiar actividades armadas es difícil porque los troncos se detectan fácilmente y las operaciones requieren un control seguro sobre el territorio (FAO 2005) (en contraste con los diamantes, que encierran gran valor en mínimo volumen), diversos ejemplos ilustran que ésta también ha sido vinculada a conflictos armados internos. En Liberia, la industria forestal fue utilizada por el ex presidente Charles Taylor (hoy sometido a la Corte Penal Internacional de Justicia en La Haya para responder por las atrocidades cometidas) para financiar a sus legendarias milicias. Recientemente inaugurada, la nueva presidenta liberiana, Ellen Johnson-Sirleaf, revocó todas las licencias

de las industrias madereras para frenar su vinculación a prácticas ilícitas y a la violación de Derechos Humanos. En Camboya, por otro lado, según la USAID, el Khmer Rouge taló y comercializó bosques para financiar su guerra contra el gobierno (USAID 2006, Global Witness 2004). De igual manera, en Myanmar “grupos insurgentes alargaron sus conflictos, en parte para dedicarse a operaciones de explotación de madera ilegal” (FAO 2005, p.118).

Incluso cuando la madera no ha sido utilizada para financiar facciones rebeldes, la posibilidad de su explotación ha generado conflictos locales. Así, en países como Bangladesh, Guatemala, India, Indonesia, México y Nicaragua, poblaciones indígenas y grupos tribales que habitan bosques y que muchas veces son marginadas o discriminadas, se han visto involucradas en conflictos violentos ante los intentos de explotar los recursos naturales en sus tierras ancestrales (FAO 2005, p.118).

En Colombia, la madera —o la competencia por su aprovechamiento y por los recursos que genera— no ha sido el principal alimento del conflicto armado interno. Más importante ha sido el saqueo de recursos ilegales como la coca y la amapola y legales como el petróleo. En efecto, diversos estudios han mostrado la confluencia entre zonas de cultivo o producción de estos recursos y la actividad de los diferentes actores armados colombianos (Guáqueta 2003, Echandía 1997, Díaz y Sánchez 2004, Echandía 2000, 1997).

Sin embargo, zonas de explotación y de aprovechamiento maderero han sido también focos de conflictos sociales y de actividad armada. En los departamentos del Chocó y el Cauca, por ejemplo, comunidades nativas y/o locales se han visto involucradas en dinámicas de conflicto por lo menos potenciadas —si no causadas— por la explotación de bosques naturales. El más reciente ejemplo lo constituye el secuestro y asesinato de varios aserradores en Ríosucio/Chocó, aparentemente como parte de la reconquista territorial de la guerrilla izquierdista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras la desmovilización de un importante bloque de las autodefensas de derecha, o paramilitares (El Tiempo, 14 de julio 2006)¹. Atravesados así por variables como la pobreza y la falta de presencia estatal, los conflictos sociales regionales han dado pie a múltiples denuncias, muchas veces apoyadas por ONGs nacionales e internacionales y por entidades estatales. Estas denuncias incluyen desde el deterioro ambiental hasta el desplazamiento de las comunidades de sus tierras para permitir la explotación y utilización de los bosques (Madera 2006), pasando por la tala de árboles para plantar cultivos ilícitos.

¹ Para mayor información sobre el contexto del conflicto armado colombiano ver International Crisis Group (2006, 2003, 2002), el libro reciente del IEPRI, 2006, Internacional Alert 2006.

Por otro lado, como lo ilustra el Mapa 1, varias zonas de producción maderera se ubican en territorios con una alta intensidad del conflicto armado. Aquí, los actores armados se han hecho presentes ya sea por coincidencia (porque la ubicación coincide con corredores estratégicos para transportar drogas y armas, como en el caso del Chocó hacia el Urabá, que conectan el Océano Pacífico con el Atlántico), o para participar del negocio de la madera, suministrando maquinaria para su explotación y comprando la madera después de aserrada (es el caso de los paramilitares, *El Tiempo* 14 de julio 2006, Aldana 2004) y, también, para extorsionar a las empresas forestales (en el caso de guerrillas y paramilitares). Aún cuando no operan en zonas de conflicto —como es el caso de la industria de los muebles, en gran parte urbana y alejada de los principales focos del conflicto armado— empresas vinculadas a la cadena productiva de la madera se han visto involucradas en las dinámicas del conflicto armado al obtener parte de sus insumos de la explotación muchas veces ilegal o poco regulada de la madera. Finalmente, toda la industria maderera ha estado expuesta a los efectos detrimentales que la economía colombiana ha experimentado como consecuencia de la situación general de inseguridad en el país (Rettberg 2004). Por el lado económico han vivido dificultades para atraer inversión extranjera, fuga de capitales nacionales, mercados incipientes y baja demanda, mientras que por el lado de la inseguridad han padecido el secuestro y la extorsión.

En múltiples sentidos, entonces, los bosques colombianos y la materia prima que encierran han estado inmersos en situaciones conflictivas, en las que son porosos los límites entre conflicto social y conflicto armado y donde, desde inicio a fin, la cadena de la madera se intersecta con las dinámicas del conflicto armado colombiano.

En este contexto, surge la pregunta acerca de la contribución que uno de los actores claves de la cadena de la madera puede hacer a la construcción de paz en Colombia: el sector privado forestal formal². No sólo opera u obtiene sus principales insumos de áreas sumidas en situaciones conflictivas, sino que sus operaciones productivas, sus lazos de distribución y el uso dado a la materia han dado pie a cuestionamientos de sostenibilidad social y económica y se han visto afectadas por situaciones propias del conflicto armado. Desde todos los ángulos ese sector constituye un socio potencial privilegiado de esfuerzos dirigidos a superar contextos regionales de conflicto armado y contribuir así, a establecer las bases de una paz duradera en el difícil entorno colombiano.

En este documento se aborda la relación entre bosques (naturales y plantados), conflicto armado y construcción de paz en Colombia desde la óptica de las empresas forestales que operan en el país. El propósito es triple: en primer lugar, se busca establecer cuál ha sido la relación entre sector forestal y conflicto armado en

² Se hace esta aclaración para distinguir el objeto de estudio del vasto tráfico informal de la madera en Colombia.

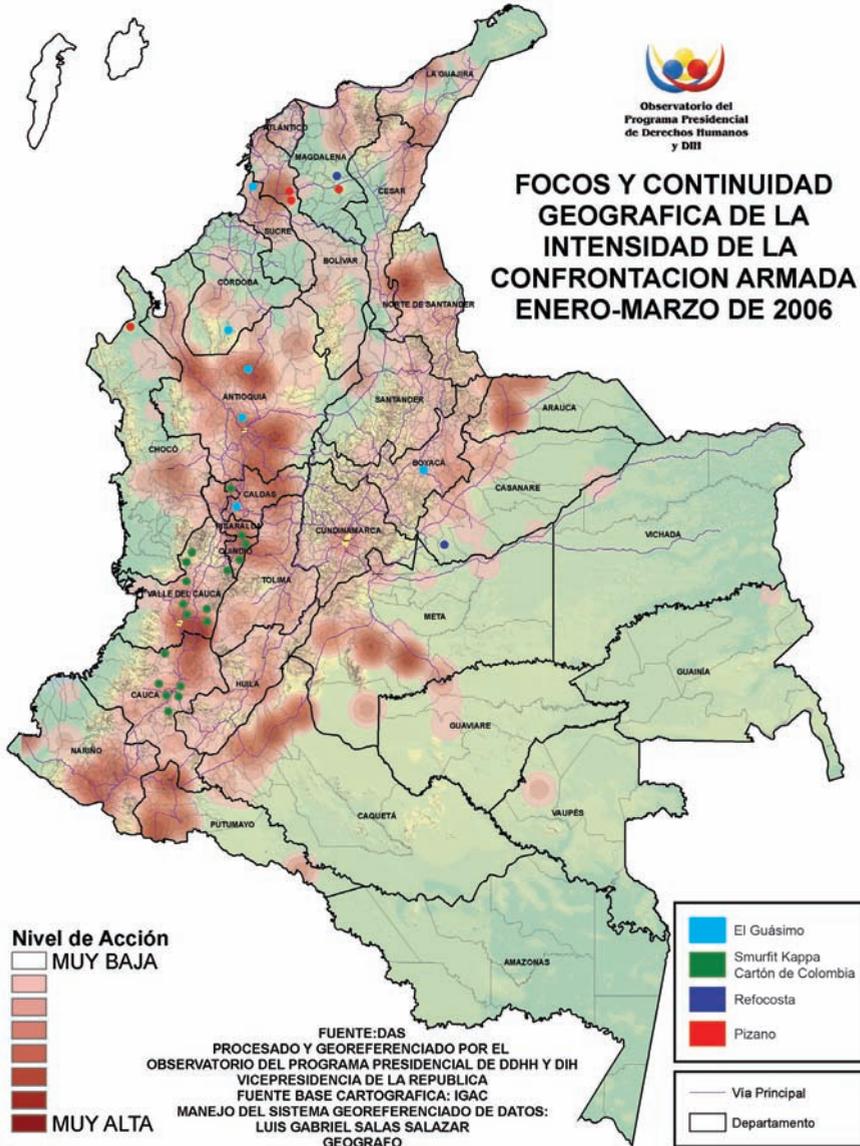
Colombia. Con ello, podrán identificarse, en segundo lugar, cuáles han sido algunas de las respuestas del sector forestal frente a la situación regionalmente específica de conflicto armado brindando especial atención a lo que han hecho empresas forestales para superar por medios pacíficos las condiciones locales de conflicto armado y sus efectos en las empresas y en sus entornos sociales. Finalmente, el documento busca arrojar insumos que permitan identificar en qué medida la actividad forestal puede vincular más eficazmente al sector privado colombiano a la construcción de paz.

El documento tendrá tres secciones. Una parte teórica inicial esbozará elementos esenciales de la literatura sobre la economía política de los conflictos armados, que ha analizado más cercanamente la extracción de recursos naturales como aporte a los conflictos armados. De igual manera, en esa parte se esbozarán los principales pilares de la construcción de paz y de los retos que plantea para las sociedades que buscan emerger de situaciones conflictivas. La sección teórica concluye con una mirada específica al rol que cabe al sector privado tanto en la profundización de los conflictos como en la superación de la guerra. La segunda sección concentra nuestra mirada en el sector forestal colombiano. Inicia con una descripción de datos básicos sobre el sector (composición, contribución al PIB) para después avanzar a la caracterización de la situación de conflicto armado y social que enfrentan las empresas tanto en las áreas de las que obtienen sus materias primas como en sus procesos productivos posteriores. La sección concluye con un listado de actividades y respuestas que el sector privado forestal ha producido frente a las circunstancias de conflicto que lo afectan. El propósito de esta segunda sección es identificar la especificidad del sector forestal tanto en términos de los costos que le impone el conflicto como en términos de las respuestas que puede generar frente a él. En la tercera y última sección, se argumenta el caso a favor del rol que el sector privado forestal colombiano puede asumir en la construcción de paz en Colombia y se esbozan recomendaciones puntuales.

Nota Aclaratoria: El mapa de la Geografía de la Intensidad de la Confrontación Armada fue tomado del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República (www.derechoshumanos.gov.co/observatorio) y sobre éste se ubicaron las plantaciones forestales.

Nota Aclaratoria 2: “Nivel de acción” “mide el nivel (muy bajo o muy alto) de las acciones perpetradas por los grupos irregulares o de acciones militares de la Fuerza Pública y propone a través de la aplicación de la función Kernel una lectura de las mismas por focos y continuidad geográfica”, Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República (www.derechoshumanos.gov.co/observatorio). La intensidad de la confrontación armada corresponde a la sumatoria de las siguientes variables perpetradas por grupos irregulares (FARC, ELN y AUC) y por la respuesta de la Fuerza Pública: actos terroristas, asaltos a población, ataques a instituciones militares, emboscadas, hostigamientos, piratería terrestre y contacto armado.

Mapa 1. Plantaciones forestales según municipio de operación y niveles de confrontación armada – 2006



Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República (www.derechoshumanos.gov.co/observatorio).

II. El marco conceptual: Recursos, conflictos, construcción de paz y sector privado

La economía política de los conflictos armados

La persistencia de los conflictos armados internos en el contexto de la post-Guerra Fría despertó el interés de académicos y funcionarios de instituciones internacionales. Contrario a lo esperado, el cese del enfrentamiento bipolar entre dos potencias ideológica y militarmente opuestas no significó que cesaran también lo que se suponía eran las manifestaciones locales del enfrentamiento. Si bien en algunos casos, como en los países centroamericanos, el fin de la financiación externa constituyó un poderoso aliciente para la suscripción de acuerdos de paz, en otros países los conflictos armados continuaron o, incluso, se revigorizaron.

En ese contexto, surgieron dos corrientes explicativas. Por un lado, quienes vieron en conflictos como el yugoslavo o en algunos africanos como el de Ruanda y Burundi el renacer de un nacionalismo vigoroso, opacado durante años por la imposición del sello Oriente-Occidente (Ignatieff 2000). Por otro lado, bases de datos de cientos de conflictos armados internos a nivel mundial permitieron a otros identificar un aspecto clave de los conflictos de la post-Guerra Fría: la relación cercana entre disponibilidad de recursos saqueables e incidencia de rebeliones (Collier 2000, Collier y Hoeffler 2001, David Keen 2000, 2001, Berdal y Malone 2000). Así, cuestionaron uno de los principios más longevos de las explicaciones sobre las revoluciones sociales, de acuerdo con el cual habría conflicto donde hay pobreza. Al contrario, encontraron estos teóricos, la rebelión necesita recursos para operar, al mismo tiempo que los recursos generan incentivos para combatir (de Soysa 2000). En efecto, muchos de los conflictos armados de la actualidad surgen en entornos de gran riqueza. Sumada a factores como la desigualdad, la ausencia estatal y la disponibilidad de mano de obra joven y masculina, la disponibilidad de recursos se convirtió entonces en predictor de la incidencia de conflictos armados internos (Nasi y Rettberg 2005).

Versiones trivializadas de este argumento llevaron a explicaciones reduccionistas que convirtieron la rebelión en simple empresa lucrativa. En Colombia, por ejemplo, los nexos entre el narcotráfico y los grupos armados ilegales llevaron a muchos a explicar el conflicto armado como simple criminalidad a gran escala (Rubio 1999). Sin correr ese riesgo, hoy puede decirse que se ha avanzado en el reconocimiento de la necesidad de autofinanciarse que tienen los grupos rebeldes y de la naturaleza potencialmente generadora de conflictos sociales de los recursos, sin que ello implique la ausencia de motivaciones políticas en las insurrecciones.

La construcción de paz

En junio de 1992, el entonces Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Boutros Boutros-Ghali, publicó la *Agenda para la Paz* (ONU 1992).

En este documento recogió y formuló por primera vez los elementos de la construcción de paz para el post conflicto (*post conflict peacebuilding*). Reflejaba así una creciente preocupación de esta organización internacional por aprovechar el fin de la Guerra Fría para brindar nueva atención a la solución y la prevención de conflictos entre —y dentro de— los países del mundo. A pesar de que el número efectivo de conflictos intra e internacionales ha disminuido en la década de los noventa (Gurr, Marshall y Khosla 2003, IEPRI 2006), un número creciente de organizaciones internacionales públicas y privadas han incluido el tema de la construcción de paz para el post conflicto en su agenda de actividades de investigación y en sus recomendaciones de políticas de intervención.

Después de una década de su formulación, la definición más generalizada de la construcción de paz para el post conflicto es aún aquella propuesta por Boutros-Ghali. En sus palabras, la construcción de paz consiste en “acciones dirigidas a identificar y apoyar estructuras tendientes a fortalecer y solidificar la paz para evitar una recaída al conflicto” (ONU 1992). La vaguedad de la definición no es fortuita, pues una parte significativa de la documentación sobre el tema se elaboró sobre la marcha, surgiendo de la práctica de las entidades multilaterales involucradas en los conflictos que estallaron en los albores de la década de los noventa. Es así como bajo el rubro de construcción de paz se relacionan actividades que van desde desarmar a excombatientes, destruir armas y remover minas antipersonales hasta repatriar refugiados, monitorear elecciones, proteger el medio ambiente, avanzar en la protección de los derechos humanos, reformar y fortalecer las instituciones gubernamentales y judiciales, apoyar la reconciliación de la sociedad y promover procesos formales e informales de participación política (Rettberg 2003).

En buena parte, la dificultad de delimitar la definición de construcción de paz para el post conflicto refleja una tensión entre una visión minimalista de los retos del post conflicto (reducido a la superación de las secuelas específicas del conflicto

como, por ejemplo, la reconstrucción de la infraestructura destruida) y una visión maximalista (enfocada en parar la guerra y generar las condiciones propicias para fomentar el desarrollo económico, político y social del país en cuestión para superar las causas así llamadas ‘estructurales’ de los conflictos, como, por ejemplo, la pobreza, la inequidad y la exclusión que estas generan) (Rettberg 2003). Para los minimalistas, mezclar las agendas de la paz y del desarrollo genera problemas de eficacia y de legitimidad (Lund 2002). Además, sugieren la existencia de problemas conceptuales para la definición de la construcción de paz, pues no todo lo que es esencial para el desarrollo lo es para la construcción de paz (Lund 2002), por lo cual, sólo después de recuperar una forma pacífica e institucionalizada de solucionar los conflictos, la sociedad podrá abocarse a la agenda más amplia del desarrollo. Los maximalistas, en cambio, sugieren que una construcción de paz para el post conflicto que no ataque problemas estructurales como la pobreza y la inequidad es insuficiente (Bendaña 2002). Las palabras de Galtung son dicientes cuando llama la de los minimalistas una paz “negativa” (Galtung 1996). En efecto, según los maximalistas, la visión minimalista puede ser una fuente adicional de conflicto por no abordar los problemas de fondo. Para generar una paz duradera, sugieren, se requiere de la identificación de las principales fuentes —pasadas y potenciales— del conflicto, desde sus raíces históricas y estructurales hasta sus manifestaciones inmediatas (Lund 2002).

Con base en la experiencia acumulada, que asocia altos niveles de desarrollo con bajos niveles de conflicto (Gurr, Marshall y Khosla 2003), por un lado, y con mayores posibilidades de superarlo, por el otro (Doyle y Sambanis 2000), se ha abierto campo una posición intermedia que destaca la relación entre crecimiento económico, por un lado, y reducción de la pobreza y disminución del riesgo de conflicto, por el otro (Collier y Hoeffler 2000). Esta corriente subraya la necesidad de evitar la recurrencia del conflicto, por lo cual no se deben descuidar aquellos temas estructurales que pueden llevar a una recaída (volviéndose estratégicos), reconociendo los límites de los recursos, dosificando los esfuerzos y escogiendo áreas de intervención sin comprometerse con agendas comprehensivas que generen problemas de eficacia y pongan en riesgo la viabilidad.

Aún con esta aclaración, el campo de quienes practican la construcción de paz hoy en día está lejos de alcanzar consenso en torno a los objetivos de su actividad y, sobre todo, respecto a los criterios para declarar exitosamente concluida la tarea. Como lo ilustran las crisis actuales de países como Irak, Afganistán, Sudán y Somalia, cómo generar bases estables futuras en medio del conflicto —especialmente después de que los ataques del 11 de septiembre generaron una mayor valoración de la seguridad en el corto plazo a cambio de los propósitos de desarrollo en el largo plazo (Tschirgi 2003)— sigue siendo un propósito que carece de lineamientos únicos y es altamente propenso al ensayo-y-error.

En Colombia, dada la situación interna de conflicto armado, las preguntas sobre construcción de paz están al orden del día. Como en otros países, no hay consenso

acerca de cuáles son logros suficientes para generar las bases de una paz duradera. Una incipiente literatura ha empezado a debatir temas relacionados con la construcción de paz en Colombia. Cabe destacar, en ese sentido, los diversos trabajos sobre conflicto armado producidos por la Universidad Nacional sobre el conflicto armado (IEPRI 2006 es el más reciente), los trabajos de la Universidad del Rosario y de los Andes en temas de justicia transicional (Gamboa 2005, Orozco 2005, Rettberg 2005), los trabajos de la Fundación Ideas para la Paz sobre procesos de Desmovilización, Desarme y Reinserción (DDR) (Guáqueta 2005) así como los del International Crisis Group (2006, 2003, 2002), el trabajo de varias ONGs como CODHES sobre desplazamiento forzado y el trabajo de la Universidad de los Andes sobre la relación entre sector privado y construcción de paz (Rettberg 2004, 2006). La mayoría de estos trabajos convergen en señalar la importancia de abordar los temas de la construcción de paz en medio del conflicto, como es el caso colombiano, tanto para anticipar algunos de los problemas relacionados con una eventual consolidación de la paz en Colombia como para precipitar el fin de la guerra. Reflexionar sobre el futuro es, en ese sentido, una manera de escogerlo (Rettberg 2003).

Al mismo tiempo, los trabajos producidos sobre el tema reflejan grandes tensiones en términos de definir los límites entre lo que está bien y lo que es posible, dadas las capacidades variables de financiación de actores domésticos e internacionales, los intereses y capacidades divergentes de los actores involucrados y las difícilmente predecibles implicaciones de arreglos presentes para situaciones futuras. Colombia, por tanto, no sólo no es ajena a las discusiones y debates que se adelantan en otras partes del mundo sobre el tema sino que la situación de continuo conflicto armado colombiano, uno de los más costosos en pérdidas humanas y materiales y el más duradero aún en marcha en el hemisferio occidental, imprime un sentido de urgencia a la búsqueda de soluciones para este país.

El sector privado: actor de guerra y de paz

Tanto en la literatura sobre economía política de los conflictos armados como sobre construcción de paz, el sector privado juega un papel de creciente importancia. Como lo han sugerido diversos estudios, por medio de su actividad económica éste ha contribuido —intencionalmente o como efecto secundario de su actividad— a la profundización o el mantenimiento de conflictos en distintos países: Por ejemplo en Nigeria, la petrolera Shell ha sido implicada en la represión social liderada por el gobierno contra opositores a la exploración³, mientras que la comercializadora surafricana de

³ En 1994, el gobierno nigeriano ejecutó a nueve miembros de la tribu Ogoni por haber participado en protestas contra las prácticas ambientales de la Royal Dutch/Shell. Esas ejecuciones llevaron a que la compañía fuera sometida a duras críticas por grupos de protectores de derechos humanos. Ver Bennett (2001), y Amnesty International y The Prince of Wales Business Leader Forum (2000).

diamantes DeBeers ha sido criticada por contribuir a la consolidación financiera de los rebeldes de Angola, de la República Democrática del Congo (anteriormente Zaire) y de Sierra Leona por medio de la adquisición de diamantes extraídos de minas bajo control rebelde (Global Witness 1998, 2000, Cilliers y Dietrich 2000). De forma similar, la actividad de empresas petroleras como la canadiense Talismán en Sudán y la estadounidense Oxy en Colombia, ha puesto sobre el tapete la pregunta acerca de los lazos entre la búsqueda de lucro y rentabilidad por parte de compañías privadas y la profundización o mantenimiento de los conflictos locales (Bennett 2001, Mack 2002)⁴.

La contribución de las compañías a la profundización o mantenimiento de los conflictos opera en distintas direcciones. Por un lado, las empresas pueden contribuir al mantenimiento y profundización de los conflictos comprando materias primas a los rebeldes (como en el caso de los diamantes y la madera), generándoles viabilidad financiera (Global Witness 2001). Pagar secuestros y extorsiones también contribuye a la financiación de los actores armados. Además, muchas empresas financian milicias privadas para proteger sus actividades, generando un nuevo foco potencial de violencia (Lilly 2000, International Consortium of Investigative Journalists 2002). En cuarto lugar, muchas veces empresas han pagado sobornos a funcionarios estatales para mantener sus operaciones en zonas contenciosas, apoyando así gobiernos corruptos e ilegítimos (Davies 2000). Por otro lado, si bien los conflictos deprimen los precios de algunos bienes y servicios, también elevan los precios de otros, como los servicios de seguridad y la fabricación de armamento, generando así mercados lucrativos para empresas especializadas en estos campos (Center for Public Integrity 2002). Finalmente, la incertidumbre resultante de los conflictos y el retiro de aquellas compañías más adversas al riesgo permite a las compañías que perduran controlar la producción, beneficiándose también de una disminución de las restricciones legales a sus actividades y de la posibilidad de pagar bajos salarios (Cilliers y Dietrich 2000, Global Witness 1999, 1998).

Así, la literatura ha mostrado no sólo que los conflictos armados pueden presentar oportunidades económicas para diversos actores, quienes, por tanto, desarrollan un interés en la continuación de los mismos (Keen 1998, Berdal y Malone 2000), sino también que la actividad económica puede, sin proponérselo, contribuir al conflicto y, finalmente, y especialmente en los casos de conflictos armados de larga duración, estos pueden adquirir visos de normalidad a medida que los actores privados internalizan las circunstancias y adaptan su comportamiento a ellas.

⁴ El punto sobre la relación entre presencia de inversión extranjera y desestabilización en los países anfitriones no es nuevo, como lo ilustra una amplia literatura sobre la relación entre multinacionales y regímenes militares. En suma, estos factores cuestionan la relación necesaria entre inversión extranjera, mayor crecimiento y mayor bienestar y liberalización política, apuntando al potencial desestabilizador de la inversión extranjera (Coatsworth 1998).

Sin embargo, los trabajos sobre el tema aún dejan algunos temas por explorar. En primer lugar, la literatura tiende a presentar al sector privado como un actor unificado. Sin embargo, la heterogeneidad que en la práctica caracteriza las reacciones del sector privado en contextos de conflicto sugiere que es necesario explorar algunas distinciones internas al sector privado para explicar la variación, asociadas con el sector de las empresas, su tamaño, y su ubicación geográfica. Otra distinción es aquella entre sector privado doméstico e internacional. Hasta hace poco, la literatura sobre sector privado y conflicto ha privilegiado el estudio de las compañías transnacionales que obtienen sus insumos de países en situaciones de conflicto interno. Sólo recientemente el sector privado local, las particulares circunstancias políticas y económicas que enfrenta, las motivaciones que lo guían y las opciones y estrategias que explora ha sido abordado por los estudiosos (International Alert 2006, Rettberg 2004).

Por otro lado, el énfasis en cómo el sector privado contribuye a los conflictos subestima las motivaciones empresariales en dirección contraria, lo que lleva a considerar la relación entre sector privado y construcción de paz. Varios casos donde los conflictos armados han cesado (por ejemplo en El Salvador y en Suráfrica) contaron con el decidido apoyo de los empresarios nacionales (Azam et.al. 1994, Gerson 2001, Haufler 2001, Rettberg 2003, 2006, Wood 2001). Al mismo tiempo, aún cuando los empresarios no participen directamente en procesos de construcción de paz, decisiones empresariales como invertir, emplear y producir ejercen una considerable presión en el proceso de toma de decisiones así como en la efectividad de las políticas adoptadas. Por tanto, en la medida en que genera y controla capital, recursos humanos y conocimiento, el sector privado es una fuente clave de insumos para la construcción de paz.

Una de las formas de medir el apoyo empresarial a la construcción de paz es aquella relacionada con la disposición a asumir algunos de los costos asociados con la construcción de paz. Estos costos incluyen gastos tangibles como impuestos más altos y compromisos de contratación de excombatientes, pero también costos de oportunidad y riesgos elevados, que deberán ser sopesados —aunque siempre de manera aproximada— con los costos de la continuación del conflicto (Rettberg 2006). “Vender” la paz al sector privado como un negocio rentable y proveerlo de los incentivos necesarios —por medio de la cuantificación y diseminación del así llamado “dividendo de la paz”— se convierte así en uno de los retos más exigentes para los promotores de una agenda de construcción de paz (Haufler 2001, Wenger y Möckli 2003).

De nuevo, el sector privado no es una categoría homogénea enfrentado a las posibilidades de vincularse a la tarea de la construcción de paz. No sorprende que sea más fácil persuadir a aquellas empresas más afectadas por el conflicto armado, menos móviles (incapaces de trasladar sus operaciones hacia zonas más seguras) y de tamaño mediano a grande, que tienen la capacidad humana y de inversión para dedicar recursos a la construcción de paz. Además, compañías con trayectorias

institucionales en responsabilidad corporativa son más propensas a adoptar una agenda de construcción de paz (Rettberg 2004, en imprenta).

En Colombia, se produjo un incremento en la vinculación del sector privado a las tareas de la construcción de paz a mediados de los años noventa, que se materializó tanto en una significativa participación empresarial en las (a la postre fallidas) negociaciones de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como en el surgimiento de diversas iniciativas de paz en el nivel local colombiano (Rettberg 2003, 2004, 2006, International Alert 2006b). La disminución de los índices de violencia durante el gobierno de Álvaro Uribe ha restado ímpetu a estas manifestaciones al revigorizarse la expectativa de una victoria militar sobre las guerrillas colombianas. Sin embargo, persiste una masa crítica empresarial que se ocupa de los retos de la construcción de paz en Colombia y que será crucial para articular la respuesta del sector privado una vez se demuestre la resiliencia y la capacidad de transformación del conflicto armado colombiano así como la dificultad asociada con las soluciones fáciles.

III. El sector forestal colombiano: testigo del conflicto armado y potencial socio en la construcción de paz

Por diversas razones, el sector forestal colombiano se presta para un análisis pormenorizado de los posibles aportes del sector privado a la construcción de la paz en Colombia. Como lo revelarán las secciones siguientes, el sector forestal ha estado profundamente inmerso en las dinámicas del conflicto armado colombiano. En un extremo, algunas empresas han sido acusadas de apoyar actores ilegales. Además, como lo muestra el Mapa 1, la mayoría de las principales empresas forestales operan en zonas de alta conflictividad que se encuentran bajo el control de —o en disputa entre— los principales actores del conflicto armado colombiano. Ello ha repercutido en el ambiente laboral de las zonas en las que operan, en dificultades para la distribución y en la ocasional postergación de planes de producción, a la espera de que las condiciones locales se calmen. Como lo sugieren también las entrevistas con los directivos de algunas de las empresas del sector, éstas han sido (y están siendo) objeto de extorsiones (a las compañías o a sus trabajadores), secuestros, destrucción de maquinaria y quema de bosques. El conflicto armado forma parte de la cotidianidad de la cadena de la madera en Colombia.

Como se sugirió en la sección teórica previa, la construcción de paz precisa del apoyo del sector privado, en general, pero de aquellas fracciones más afectadas por, e inmersas en, las dinámicas del conflicto armado, en particular. Son estas las que, con orientación y ayuda, más fácilmente pueden identificar los costos del conflicto para su actividad productiva así como las maneras para abordar las causas locales de su mantenimiento y su contribución a ello. El sector forestal cabe en esta categoría.

Para contextualizar la relación entre sector privado forestal, conflicto armado y construcción de paz en Colombia, esta sección iniciará con una breve descripción del panorama económico actual del sector para después identificar las formas peculiares en las que este se encuentra inmerso en las dinámicas del conflicto armado. La sección concluye con una revisión de aportes que empresas del sector ya están haciendo a la construcción de paz en el nivel local.

a. Evolución y panorama económico actual del sector forestal colombiano

En el mundo, la demanda maderera es suplida hoy en día tanto por los bosques naturales como por las plantaciones. Sin embargo, hoy se presenta un incremento de la demanda maderera proveniente de plantaciones, en parte debido a las “presiones ambientalistas [que] han hecho que los esfuerzos a nivel mundial estén encaminados a reducir la extracción de madera en los bosques naturales, mejorar las prácticas de extracción, reducir las actividades forestales ilegales y fortalecer la ordenación forestal comunitaria” (Espinal, Martínez, González, 2005, p.2). Si bien el mercado “se encuentra altamente concentrado en los países desarrollados, tanto en la producción como en el consumo, (...) durante los últimos años (...) países tradicionalmente productores como Canadá y Estados Unidos han cedido frente a nuevos países como Nueva Zelanda, Brasil y Chile” (Espinal, Martínez, González 2005, p.2).

La participación de Colombia en el mercado de productos forestales aún es marginal y la explotación de la madera (en su mayoría de bosques naturales⁵) se caracteriza por elevados niveles de corrupción, informalidad e ilegalidad y baja regulación (entrevista con representante gremial, Bogotá, 22 de junio, 2006). Además, como en otros países (más notablemente Indonesia y Perú), el Estado colombiano ha promovido políticas de colonización para afirmar su soberanía nacional en áreas fronterizas, expandir la frontera agrícola o para aliviar la presión en zonas urbanas (Roper y Roberts 1999). En algunos casos “el Estado otorgaba permisos [*de explotación*] bajo la premisa de que ahí no había gente” (entrevista con representante de empresa forestal, Bogotá, 27 de junio, 2006), ocasionando conflictos locales con las comunidades del lugar. Por otro lado, según la Política de Reforma Agraria de 1961, por ejemplo, para lograr la adjudicación de tierras, los colonos debían demostrar que habían hecho “mejoras” (incluyendo la tala de una tercera parte del área del predio). Esta política sólo se modificó con la Ley 30 de 1988 (Ministerio de Ambiente y Departamento de Planeación Nacional 1995, p.6). Esta situación de escaso control o de manejo inadecuado de los bosques ha contribuido a los altos niveles colombianos de deforestación. Al respecto, las cifras varían (Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2000) y la ubican entre 200.000 (ONU 2003) y 600.000 hectáreas al año, una de las cinco mayores tasas de deforestación de bosque tropical húmedo en el mundo y un fenómeno en proceso de aumento (Conpes 2834, 1996, Semana 1996, Acosta, 2004:4, United Nations 2003 y Rainforest Alliance 2006). La tabla 1 presenta la distribución de causas de la deforestación, según la Política Nacional de Biodiversidad (1995).

Tampoco estos datos gozan de consenso. Según el antiguo gerente de Fedemaderas, de lo que se tala, un 70 por ciento se gasta en leña de uso doméstico

⁵ Según Aldana (2004:15), “el suministro de madera proveniente de esta fuente (bosques naturales) puede fluctuar entre el 70 y el 80 por ciento del total del país.”

Tabla 1. Causas de la deforestación en Colombia

Expansión frontera agrícola y colonización	73%
Producción maderera	12%
Consumo de leña	11%
Incendios forestales	2%
Cultivos ilícitos ⁶	2%

Fuente: Ministerio del Ambiente y Departamento Nacional de Planeación, *Política Nacional de Biodiversidad*, 1995, p. 5.

y sólo el 30 por ciento restante es madera aserrable (entrevista con representante gremial, Bogotá, 22 de junio, 2006).

Aún esta madera es subexplotada, de manera que los rendimientos por hectárea son bajos y las deficiencias en la calidad son comunes, dificultando la participación competitiva del sector en el mercado internacional” (Espinal, Martínez, González 2005, p.2). Según un representante gremial, el sector adolece severos problemas de encadenamiento, pues del corte al mueble o a la construcción no funcionan diversos eslabones, debido a la informalidad y la ilegalidad (el sector pulpa parece ser una excepción). Eso dificulta un incremento de la calidad y la productividad de la materia prima (entrevista con representante gremial, Bogotá, 22 de junio, 2006).

Si bien la mitad del territorio nacional tiene cubierta forestal, sólo 68 por ciento de ella contiene “especies maderables con dimensiones apropiadas para uso industrial”. Aún estas son de difícil acceso (Espinal, Martínez, González, 2005, p.33). Así, según el *Informe Nacional Colombia*, el “(...) 61.5 por ciento (*de la tierra*) es de vocación forestal, pero sólo un 49 por ciento está bajo ese uso” (Acosta 2004, p.3).

Con respecto al empleo, el sector forestal genera “57.615 empleos que corresponden al 1.7 por ciento del empleo generado por el sector agropecuario y agroindustrial en su conjunto” (Espinal, Martínez, González 2005, p.32). La balanza comercial del sector es negativa. El déficit es ocasionado principalmente por las importaciones de pulpa y papel, en especial papel periódico” (Aldana 2004, p.37). Como resultado, “la contribución de la selvicultura y de la extracción de madera al PIB agropecuario es sólo del 1.2 por ciento y al PIB del país únicamente el 0.2 por ciento, a pesar de la gran extensión en bosques y del gran potencial para

⁶ Según el documento Conpes 2834, enero de 1996, “se calcula que por cada hectárea de coca sembrada se destruyen dos hectáreas de bosque, y por cada hectárea de amapola se destruyen 2,5 de bosques” (Conpes, 1996, p. 6).

establecer plantaciones forestales. Al incluir la industria derivada de los bosques (pulpa, papel, cartón, madera procesada, muebles) la contribución del sector forestal al PIB nacional es de 1.8 por ciento” (Aldana 2004, p.37).

Las plantaciones forestales en Colombia

En Colombia, los procesos de reforestación se iniciaron en la década del cuarenta pero se incrementaron en la década de los setenta y ochenta “para luego decaer al no responder a las expectativas de los productores” (Espinal, Martínez, González 2005, p.34). Según Aldana (2004, p.36), “las plantaciones forestales en Colombia son de dos tipos: aquellas en que predomina el propósito de restaurar, conservar y proteger los ecosistemas forestales y que en los últimos años ha sido promovido por el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental (SINA), y aquellas cuyo propósito es productivo y comercial y cuyo fomento corresponde al Ministerio de Agricultura”. Algunas de las empresas que decidieron establecer plantaciones lo hicieron para aprovechar los incentivos tributarios (principalmente en la forma de descuentos), otras para autoabastecerse (Aldana 2004, p.36). En ese sentido, muchas empresas forestales colombianas o relacionadas obtienen sus insumos tanto de bosques naturales como de plantaciones propias.

Con respecto a las plantaciones desarrolladas para fines comerciales y en concordancia con la sugerencia arriba mencionada de la baja productividad general del sector forestal, estas representan únicamente el 0.7 por ciento “del potencial estimado por el PNDF (Plan Nacional de Desarrollo Forestal) para dicho fin (25 millones de hectáreas), y el 1 por ciento de las áreas con aptitud para llevar a cabo plantaciones (16 millones), según los resultados obtenidos en los trabajos de zonificación realizados por CONIF” (Espinal, Martínez, González 2005, p.34). Su contribución al suministro de madera industrial en el país es calculado entre el 12 y el 20 por ciento del volumen total (Acosta 2004, p.7). Lo anterior se puede explicar por factores como: “el escaso interés de los grupos industriales, resultados negativos en experiencias anteriores, errores en la selección de sitio y especie, dificultad para comercializar algunos productos, desconocimiento de nuevas líneas industriales, bajo desarrollo tecnológico del sector industrial, ineficiencia gerencial y administrativa de algunas empresas, desconocimiento del negocio de la reforestación, personal poco capacitado, y actitud conservacionista del Estado, cuyos planes no contemplan el desarrollo forestal en función de la necesidad nacional e internacional de productos forestales, ni consultan las ventajas comparativas que tiene Colombia para la producción de materias primas de alta calidad” (Espinal, Martínez, González 2005, p.35). Ello refleja los problemas de encadenamiento mencionados arriba (entrevista con representante gremial, Bogotá, 22 de junio, 2006) así como la falta de una política coherente de fomento y desarrollo de la producción de materias primas “destinadas a la industria productora de bienes para los mercados nacional y extranjeros” (Espinal, Martínez, González 2005, p.36).

La Tabla 2 presenta las principales empresas del sector en Colombia.

Tabla 2. Plantaciones forestales con área mayor a 500 hectareas

Reforestador	Área (Ha)
Reforestadora Andina	26.626
Monterrey Forestal	11.251
Gaviotas	7.000
Reforestadora de la Costa	6.619
Smurfit Cartón de Colombia	5.710
Industria Forestal Doña María	5.596
Pulpapel	4.654
Reforestadora el Guásimo	3.161
Soc. Forestal Cafetera del Valle	2.925
Reforestadora San Sebastián	2.757
Acerías Paz de Río	2.522
Papelsa	2.083
Minercol (Ecocarbón)	2.028
Cipreses de Colombia	2.022
La Cabaña	1.850
Ganados y Maderas	1.293
Pro-oriente	1.156
Tablemac	1.085
Reforestadora del Cauca	1.019
Mercados y Valores y Otros	968
Corporación Forestal del Tolima	917
G.P.A. Negativa	815
Pinoquia	725
Maderas de Oriente	652
La Florida	522
Mercados y Valores	516
TOTAL	96.472

Fuente: Varón, Luisa. "Reforestación, inversión con buena cosecha" Revista M&M, disponible en: <http://www.revista-mm.com/rev24/refores.htm>

De estas empresas, Monterrey Forestal (Pizano S.A), Reforestadora de la Costa (REFOCOSTA) y Smurfit Kappa Cartón de Colombia han liderado el desarrollo de programas de reforestación comercial (Aldana 2004, p.92). Sus plantaciones nutren las industrias de pulpa, tableros aglomerados e inmunización⁷.

b. Sector forestal y conflictos armados

Panorama mundial

Los conflictos forestales son comunes en el mundo y se pueden definir como “situaciones en las que la ubicación, el manejo o el uso de bosques resulta en violencia, violaciones de los Derechos Humanos e impedimento del acceso a los recursos forestales, resultando en una significativa disminución del bienestar humano” (Streed USAID Forest Team 2006, traducción libre). Según la USAID, doce de veintisiete países en Asia presentan conflictos forestales. En Indonesia y Camboya, más de 22.5 millones de personas (el 10 por ciento de la población) y 1.7 millones de personas (15 por ciento de la población), respectivamente, se han visto directamente afectadas por conflictos forestales (Streed USAID Forest Team 2006).

Los conflictos forestales se clasifican de dos maneras: **Tipo I**, cuando la madera y los recursos provenientes de la explotación forestal son explotados y vendidos para financiar directamente conflictos armados por medio de la compra de armas e insumos necesarios para el mantenimiento de los bandos involucrados en el conflicto (Thomson, Kanaan, 2003). Los ejemplos más claros donde se evidencia este tipo de conflicto son en países como Burma, Camboya, Nepal y Liberia. En Nepal, por ejemplo, la insurgencia maoísta “grava” directamente las plantaciones forestales para financiar sus operaciones militares (USAID 2006). **Tipo II**, cuando los conflictos se desarrollan entre los diferentes grupos interesados y en torno a la manera más adecuada para adelantar la explotación maderera y el manejo de los recursos forestales (*stakeholders*). Países como Camboya, Vietnam, Indonesia y Nepal han sido testigos de este tipo de conflictos. En Vietnam, por ejemplo, diferentes comunidades compiten entre sí para explotar los recursos naturales y la madera. El gobierno ha atizado el conflicto permitiéndole a los vietnamitas étnicos la colonización, tala de bosques y siembra de café (Thomson y Kanaan 2003, p.2). En Camboya, la explotación ilegal y legal de madera ha contribuido directamente a conflictos entre las diferentes comunidades que dependen de este recurso, el gobierno, los militares, y el sector privado (USAID 2006).

Como en los demás casos de recursos naturales vinculados a conflictos armados, los factores facilitadores de los conflictos forestales incluyen la presencia de Estados

⁷ Las inmunizaciones son un método para preservar madera y aumentar su tiempo de vida útil en el campo (Nieto 2006).

frágiles con escasas condiciones para promover la gobernabilidad y bajos niveles de desarrollo económico. Ello se refleja también en la carencia de una legislación adecuada de la explotación, el predominio de la explotación ilegal de recursos forestales y en la corrupción que reina en el otorgamiento de permisos para la explotación (Berdal y Malone 2000). Como consecuencia, los conflictos forestales fomentan la desviación de los recursos financieros, afectando los ingresos de los gobiernos y de las comunidades que se benefician de la explotación de estos recursos, el desplazamiento masivo de las personas, la violación de Derechos Humanos y la destrucción indiscriminada de los recursos naturales (Thomson y Kanaan 2003).

En reacción al documentado vínculo entre madera y conflictos, la Unión Europea, cuyas compañías se encuentran entre las principales inversionistas de los sectores forestales de los países productores y cuyos estados miembros están entre los principales consumidores de bienes manufacturados en madera del mundo, lanzó un plan de acción —el Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT) Action Plan— en mayo del 2003 para prevenir que la madera ilegal así como sus productos derivados sigan siendo comercializados y sigan contribuyendo a los conflictos armados y al subdesarrollo en los países productores (European Commission 2003). Este plan de acción fue adoptado por los países de la Unión Europea en respuesta al llamado de la Cumbre para el Desarrollo Sostenible⁸. Propende por una gobernabilidad mejorada y el desarrollo de capacidades en los países productores, busca incentivar al sector privado para eliminar la madera ilegal de sus suministros y evitar las inversiones en actividades que fomenten la tala ilegal y busca apoyar a los gobiernos que quieren asegurarse de que madera ilegal extraída de sus territorios no ingrese al mercado europeo.

Por otro lado, para detener los efectos perniciosos de la explotación ilegal, corrupta y violenta de la madera, y como ha sido intentado con otros recursos naturales (por ejemplo con los diamantes por medio del proceso Kimberley (Amnistía Internacional 2003), se han promovido procesos de certificación para asegurar sostenibilidad social y ambiental de la explotación forestal (Burger, Hess y Lang 2005). En el caso de la madera, por ejemplo, el Forest Stewardship Council (FSC) es una organización internacional que promueve el manejo sostenible y responsable de los bosques en el mundo. “A través de procesos de consulta, desarrolla estándares internacionales para el manejo forestal responsable [y] acredita a organizaciones independientes que pueden certificar actividades de manejo forestal y productores de productos forestales bajo los estándares del FSC” (Forest Stewardship Council, http://www.fsc.org/esp/que_es_fsc). La FSC como etiqueta de producto no sólo otorga reconocimiento internacional a las organizaciones que promueven directamente el manejo forestal responsable, sino

⁸ Para más información ver este enlace de la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/comm/development/body/theme/forest/initiative/index_en.htm

que también permite a los consumidores tener conocimiento acerca de quién ejerce estas acciones. El FSC es el más importante de su género en la medida en que es quien acredita a otras organizaciones para que expidan los certificados. Por su juventud, cualquier juicio sobre la efectividad de estos procesos de certificación sería prematuro. Sin embargo, desde ya sabemos que la porosidad de las fronteras nacionales, los altos niveles de corrupción y las posibilidades de lucro involucradas dificultan la efectividad de estos esquemas como antídotos contra la violencia.

c. Sector forestal y conflicto en Colombia

Gran parte de la actividad forestal en Colombia ocurre en zonas afectadas por el conflicto armado (ver mapa 1) como Cauca, Valle, Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y Magdalena (Dane - Vicepresidencia de la República 2006). La superposición de los municipios en los que operan las principales empresas de explotación forestal con datos del Observatorio para los Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República revela esta coincidencia entre actividad forestal y presencia de actores armados (ver tabla 3).

Según la clasificación presentada arriba sobre tipos de conflictos forestales, Colombia representa ambos tipos, I y II. Por un lado, son tradicionales y comunes los conflictos entre *stakeholders* en torno a la explotación del recurso de la madera (González 1998, Andrade 2004). En especial las comunidades indígenas y afrocolombianas han estado recurrentemente involucradas en debates sobre el adecuado aprovechamiento de los bosques colombianos, debates en los que se contraponen derechos comunitarios con tradiciones milenarias de usos del suelo y principios modernos de mercado (Camacho 2004). Al mismo tiempo, aunque de manera menos prominente, grupos insurgentes, en especial las autodefensas, han estado involucrados en la tala de bosques y la comercialización de la madera, muchas veces escudadas en la informalidad y la ilegalidad del negocio (El Tiempo, entrevista con representante de empresa forestal, Bogotá, 27 de junio, 2006). En tercer lugar, muy en línea con lo que ocurre en otros países ricos en recursos naturales, grupos insurgentes han buscado extorsionar a las diferentes empresas del sector privado con el fin de obtener recursos para financiar sus organizaciones. Como lo revelan los datos recogidos para esta investigación, las empresas reportan haber sufrido quema de maquinaria y plantaciones, secuestro y extorsión de empleados y otras formas de sabotaje para inducir —o en venganza por resistirse ante— el pago de extorsiones. Finalmente, aún cuando no son objeto de extorsión, las empresas forestales colombianas operan en territorios signados por el enfrentamiento armado, lo que afecta sus canales de transporte y distribución, el acceso al terreno y la contratación de trabajadores⁹.

⁹ A pesar de este panorama, Aldana (2004, p.56) reporta que “ciertos riesgos de inseguridad son menores en la actividad forestal que en otras actividades agropecuarias por la dificultad para robar y para el transporte del producto, lo que está provocando la conversión de explotaciones agropecuarias, principalmente ganaderas, a plantaciones forestales”.

Tabla 3. Departamentos y municipios con plantaciones forestales y presencia de grupos al margen de la ley

Departamento y municipio	Grupo
Smurfit Kappa Cartón de Colombia	
Cauca (Timba, Providencia, Munchique, Meseta, Salinas)	FARC
Valle del Cauca (Bolívar-Trujillo, Sevilla, Darién, Restrepo, Cumbre, Estancia, Palmira-Ginebra)	FARC
Risaralda (Pereira)	AUC, FARC
Caldas (Riosucio)	FARC
Antioquia (Yolombó)	FARC
Tolima (Cajamarca)	FARC
Pizano S.A. (Monterrey Forestal)	
Bolívar (Zambrano y Córdoba)	FARC, ELN
Magdalena (El Difícil de Ariguaní)	AUC reinsertadas
Chocó (Bajo Atrato)	FARC
Refocosta	
Magdalena (Corregimiento de Monterrubio)	-----
Casanare (Municipio de Villanueva)	AUC, ELN
Reforestadora El Guásimo	
Antioquia (Yamural)	AUC, FARC
Caldas (alrededor de Manizales)	FARC
Sucre (San Onofre)	FARC
Córdoba (Puerto Libertador)	FARC

Fuente: Vicepresidencia de la República, Observatorio para los Derechos Humanos, "Geografía de la confrontación armada y la violencia." <http://www.derechoshumanos.gov.co/modules.php?name=informacion&file=article&sid=595> y datos de las empresas.

Al unísono, las empresas afirman no haber cedido ante la presión. De igual manera, los datos de la ubicación de sus plantaciones revelan que ninguna parece haber frenado su producción en una zona para trasladarse a otra como medida de protección ante la presión de los actores armados. Las entrevistas con los directivos de las empresas confirman esta sugerencia: ninguno reportó haber discutido en su empresa el traslado de las operaciones a otro sitio o para cesar la producción. Sólo en el caso de Pizano S.A., la presión ejercida por los actores armados locales llevó a la empresa a importar temporalmente sus insumos de Guyana (entrevista con representante de empresa forestal, Bogotá, 27 de junio, 2006). A pesar de la aparente resiliencia de las empresas frente al hostigamiento de los actores armados, estas han adoptado estrategias para dispersar el riesgo y la presión, principalmente la práctica de tener plantaciones dispersadas en diferentes partes del territorio (entrevista con representante de empresa forestal, Bogotá, 27 de junio, 2006). Esto afecta la posibilidad de obtener escala en la producción y en la distribución, pero también disminuye la exposición de las plantaciones a la acción de los actores ilegales y constituye una especie de seguro para proteger la viabilidad de las empresas.

En los párrafos siguientes, se presentarán las condiciones de conflicto armado en las que operan tres de las principales empresas forestales colombianas. Los estudios de caso serán útiles para presentar de manera pormenorizada una aproximación al día-a-día de una empresa forestal colombiana.

Smurfit Kappa Cartón de Colombia

Con cuarenta mil hectáreas de plantaciones forestales, Smurfit Kappa Cartón de Colombia, que hace parte de la multinacional Smurfit Kappa Group, es el líder en producción forestal y maderera en Colombia. Es una empresa que produce pulpa, papeles de imprenta y escritura y cartón de fibra virgen de pino y eucalipto, provenientes de sus propios bosques cultivados. En el año 2005, aportó 0.09% al PIB Nacional y registró un crecimiento de 7 por ciento en sus ingresos operacionales durante el primer trimestre del 2006 (La República 2006). Los productos se comercializan en Colombia en las principales ciudades, y también tiene presencia en varios países de Latinoamérica. La empresa ha sido certificada con el ISO 9001-2000 de gestión de calidad. El año pasado sus exportaciones crecieron 6 por ciento respecto a 2004, lo cual representó el 17 por ciento de las ventas totales. La empresa tiene oficinas y plantas en todo el país, así como en Ecuador y Venezuela. En 2003, Smurfit fue certificada por el Forest Stewardship Council, una certificación que es auditada externamente cada año y revisada cada cinco años.

Como lo revela la Tabla 3 arriba, las plantaciones de la empresa se encuentran en zonas bajo influencia de uno o varios actores armados ilegales. La presencia de estos actores ha oscilado en el tiempo, y las zonas han cambiado respecto al grupo que ejerce control sobre ellas. En ese sentido, la compañía tiene una amplia trayectoria y está curtida en ver llegar y venir grupos así como en ver variar la

intensidad del conflicto. La presión sobre la empresa —especialmente aquella relacionada con el pago de extorsiones a los grupos— ha variado también. En palabras de un representante de la empresa, “la presión sube y baja. (...) Viene un comandante nuevo, (y dice) yo sí soy capaz de sacar dinero (a la compañía)” (entrevista, junio, vía telefónica, 2006). En esos casos, la compañía le envía al grupo un teléfono celular con tarjeta prepago para que la llamen, sin utilizar nombres propios.

Frente a la presión de los grupos armados, la compañía ha adoptado una política contundente de no-pago. “Se cansan de llamar”, dice un representante de la empresa, “cuando se acaba la tarjeta, dejan de llamar” (entrevista, junio, vía telefónica, 2006). Sin embargo, la resistencia a ceder ante las demandas de los grupos armados ha implicado un costo para la empresa. En algunas ocasiones, han tenido que frenar la producción en un núcleo, una decisión costosa porque “toca duplicar la estructura en otro sitio” o porque “toca hacer (una nueva) carretera a las carreras” (entrevista con representante de la empresa, junio, vía telefónica, 2006) para cumplir con las metas de producción. La empresa también ha sido objeto de ataques como quema de maquinaria y plantaciones y hostigamiento de funcionarios y empleados.

Ante la negativa de los funcionarios de la empresa a destinar recursos a los grupos armados, estos han tratado de extorsionar a los contratistas de la misma, que prestan servicios en el campo. La directiva de la empresa es que ellos deben seguir el mismo código de ética de la empresa. “Hasta ahora, que yo me he dado cuenta, ningún contratista ha caído en la trampa, (y si cayera) lo secan (es decir, le extraen todos los recursos)”, dice un representante de la empresa (entrevista, junio, vía telefónica, 2006). Sin embargo, queda abierta la posibilidad de que (como también ocurre con algunas compañías petroleras), la desviación de recursos a los actores armados no ocurra directamente de la empresa a los grupos, sino de manera indirecta, a través de los contratistas.

A pesar del hostigamiento, la empresa afirma no haber realizado cálculos del costo del conflicto para sus operaciones: “Nunca hemos cuantificado cuando nos dan duro” (entrevista con representante de la empresa, junio, vía telefónica, 2006). Incluye en los costos probables la responsabilidad con las comunidades en las que trabaja, para buscar empleo en otro núcleo mientras el afectado recobre la normalidad. No en vano, la empresa afirma que la comunidad suele defender a la empresa, al ser su principal fuente de trabajo. Al mismo tiempo, las relaciones con las comunidades no han sido sólo armoniosas. Han sido comunes las denuncias por el supuesto deterioro ambiental causado por los cultivos de coníferas en zonas cercanas a cuencas de agua (Madera 2006, Castaño 2006).

Llama la atención la relación ambigua con el ejército nacional. Por sus obligaciones múltiples y de alcance amplio, el ejército sólo puede ofrecer una protección temporal. Pero “cuando se retira, viene el acoso (de los grupos armados) al campesinado. La comunidad habla con el ejército, (les dice) ‘no nos dejan trabajar’, ‘se van y vuelve

la guerrilla'. Si a uno lo protegen en un frente (*de trabajo*), (*la guerrilla*) va al otro" (entrevista con representante de la empresa, junio, vía telefónica, 2006).

Pizano S.A. (Monterrey Forestal)

También una de las líderes de su campo, Pizano S.A. es una empresa que transforma y comercializa productos forestales desde 1935. Lidera la producción de tableros de madera en América Latina y la región andina. Sus plantas se encuentran ubicadas en las ciudades de Barranquilla y Bogotá. Actualmente esta empresa cuenta con la certificación ISO 9001- 2000 (gestión de calidad). Con activos que para el 2004 representaban \$243.923.601 millones, Pizano S.A. "presenta un saneamiento y un fuerte crecimiento de todos sus indicadores, gracias al crecimiento del mercado local por la evolución del sector de la construcción y por las exportaciones a Estados Unidos, Centro América y la región andina. Estas ventas alcanzan el 30 por ciento del total de la compañía" (Obregón 2006).

Pizano S.A. opera en territorios de alta conflictividad¹⁰. Por un lado, en el Chocó la empresa, a través de su filial Maderas del Darién, está inmersa en una dinámica local de conflicto en torno a la explotación maderera en la Cuenca del Cacarica, en el Bajo Atrato chocoano. Allí se entremezclan las demandas sociales de las comunidades locales (en buena parte signadas por los problemas de titulación de las tierras) con las acciones de las autoridades locales (en concreto, el otorgamiento de permisos de explotación de madera por parte de la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Chocó - CODECHOCÓ) con la presencia y la presión de los diferentes actores armados.

Debido a sus plantaciones y a la extracción de madera en esta zona socialmente compleja, la compañía ha sido acusada repetidamente de deterioro ambiental (Greenpeace 2005 y Observatorio de Multinacionales en América Latina), así como de protección a los grupos paramilitares¹¹ y de complicidad con procesos de

¹⁰ Según la organización ambiental Greenpeace (España), "el 40% de su madera (de Pizano), procede de zonas con presencia de grupos armados, es madera de conflicto". Ver <http://colombia.indymedia.org/news/2006/03/39116.php>, "Greenpeace se pronuncia frente a la deforestación en el Cacarica", 15 de marzo, 2006.

¹¹ Según un representante de la empresa forestal, la acusación de complicidad se relaciona con que la extracción de la madera precisa de la construcción de canales acuáticos que han sido utilizados por los paramilitares para su movilización (entrevista con representante de la empresa, Bogotá, 27 de junio, 2006). "Los paras no nos han tocado directamente", dice. "Interfieren con comunidades porque se meten en negocio de madera, (pero) no se meten con las maderas que nosotros usamos, hacemos tableros, (que usan madera que) no le sirve a nadie hasta que pase por un proceso de ingeniería. A ellos les interesan las maderas finas, que las compran en depósitos en el centro del país, como Medellín, la zona cafetera, el Valle del Cauca" (entrevista con representante de la empresa, Bogotá, 27 de junio, 2006).

desplazamiento de población. A raíz de las denuncias, Pizano ha sido objeto de tutelas y de procesos disciplinarios en la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, que no han llevado a demandas formales, pero que ilustran los complejos y difícilmente reconciliables intereses en juego (Greenpeace 2005, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 2006). Contribuyen a la tensión local las relaciones tirantes con la ONG Justicia y Paz, de la Comisión Intereclesial, que ha sido acusada por fuerzas oficiales de ser cómplice de la guerrilla y cuyos liderazgos comunitarios locales compiten con aquellos promovidos por la empresa. Al mismo tiempo, la compañía ha sido objeto de ataques por parte de la guerrilla, que incluyen quema de campamentos y de maquinaria, secuestros y asesinatos de trabajadores (entrevista con representante de empresa forestal, Bogotá, 27 de junio, 2006). La negativa de la compañía a pagar sobornos y extorsiones (entrevista con representante de empresa forestal, Bogotá, 27 de junio, 2006) ha contribuido a generar esta animosidad, junto con la percepción de su alianza con las autodefensas de derecha.

No facilita las cosas el que el bosque natural explotado se ubique sobre el corredor estratégico del río Atrato, utilizado por todos los actores armados para transportar armas y droga entre los océanos, aprovechando a su paso las inhóspitas y difícilmente controlables tierras del Urabá. En ese sentido, la situación de Pizano S.A. en el Chocó ilustra las dificultades para mantenerse al margen para empresas que operan en zonas de conflicto intenso, pues difícilmente logran ser consideradas neutras por los grupos con presencia en la zona. Aquí se atraviesan las estrategias corporativas de extracción de un recurso con las demandas de las comunidades, con los intereses estratégicos de las autoridades locales y de los actores armados ilegales en disputa por el control territorial, así como con la confluencia de actores de la sociedad civil como las ONG.

Por otro lado, desde 1981 la compañía dio inicio a un extenso proyecto de reforestación, desarrollado a través de la compañía Monterrey Forestal Ltda., en los municipios de Zambrano y Córdoba (Bolívar), sobre el río Magdalena, y en el municipio de El Dificil de Ariguaní (Magdalena). Zambrano, escogida en su momento por la cercanía a una vía de transporte, que define la viabilidad del negocio de la madera, y por su relativa tranquilidad (a pesar de la gran pobreza reinante), vivió intensos cambios a partir de mediados de la década de los años noventa y se presta para un análisis detallado de las condiciones que impone el conflicto armado a las operaciones de las empresas forestales en Colombia.

En los años noventa, arribaron a la zona de Zambrano narcotraficantes, que adquirieron tierras ganaderas y cuyos recursos generaron la descomposición propia de las zonas bajo influencia narco, visible en la cultura del dinero fácil y el incremento de los índices de criminalidad y prostitución. “Hasta entonces éramos la única fuente de empleo (*en la zona*), este fenómeno (*del narcotráfico*) descompuso, pagó salario que nosotros no podíamos pagar”, describe un representante de la empresa (entrevista, Bogotá, 27 de junio, 2006).

Más grave aún fue la decisión de los narcotraficantes de ampliar sus fincas por la fuerza, llevando a incrementos en los niveles de violencia y al desplazamiento de personas. Para adelantar y apoyar las estrategias de expansión territorial, los narcotraficantes ingresaron a las primeras Convivir o cooperativas de seguridad. La apropiación violenta de tierras y la presencia de las cooperativas de seguridad atrajo la atención de los grupos guerrilleros hasta entonces ubicados en los cercanos Montes de María.

El cambio de zona bajo control de narcotraficantes a zona en disputa hegemónica entre paramilitares y guerrilla significó un deterioro en las condiciones operativas de la empresa, máxime cuando, tras la captura del principal narcotraficante (el así llamado Micki Ramírez), se cayó la economía narco. Por un lado, los paramilitares, apoyados por algodoneros de Córdoba pero sin acceso a recursos locales, se establecieron en el pueblo de Zambrano “como base del régimen del terror local” (entrevista con representante de empresa forestal, Bogotá, 27 de junio, 2006)¹². Consiguieron ingresos por medio del asalto a ductos de gasolina ilegal y a los camiones y su mercancía, que transitaban entre Cartagena y el oriente.

Pizano tenía guardabosques viviendo en su finca, que fueron desplazados por los paramilitares. Además, “se nos instalaron (*en una parte administrativa de la finca*), no los podemos sacar, se apoderaron de las instalaciones” (entrevista con representante de empresa forestal, Bogotá, 27 de junio, 2006).

Por otro lado, la llegada de la guerrilla desde los años 2001/2 implicó el inicio de los intentos de extorsión a la empresa. En retaliación por el no pago, ha tumbado la infraestructura y ha volado campamentos de trabajadores. El último ataque ocurrió en diciembre del 2005, cuando quemaron todos los equipos de aprovechamiento y quemaron partes de la plantación. Además, hay áreas de plantaciones que están minadas para evitar el ingreso de las personas. Los ataques han tenido “mucho impacto. No tenemos equipos”, dice un representante de la empresa (entrevista con representante de empresa forestal, Bogotá, 27 de junio, 2006). Sin embargo, según la empresa, la compañía mantiene la política de no pago.

Como Smurfit Kappa Cartón de Colombia, 20.056 hectáreas de la operación forestal de Pizano S.A. Monterrey Foresta l—y los productos que de esta se

¹² Llama la atención en este tema la forma en la que se posibilitó el ingreso de los paramilitares a Zambrano: Según un representante de la empresa, antes, para llegar del departamento a Zambrano había que usar chalupas que cruzaran el río. En 1990 se construyó un puente, que facilitó la entrada en masa de los paramilitares (entrevista con un representante de la empresa, Bogotá, 27 de junio, 2006). Sorprende, en este sentido, la manera en que las vías —construidas con el propósito de promover el desarrollo, el intercambio y la integración— pueden tener también el efecto perverso y no esperado de facilitar el intercambio de violencia, como ocurrió en Zambrano.

obtienen— fueron certificadas en 2001 por el Forest Stewardship Council (FSC) a través del certificador SmartWood¹³. Por los conflictos Pizano S.A. en el Cacarica, especialmente por las actuaciones de su subsidiaria Maderas del Darién, están en curso peticiones para revocar dicha certificación, pues uno de los principios de la certificación es que los proveedores de materia prima de las empresas cumplan también con los requisitos del FSC, hecho que ha sido puesto en duda por diversas organizaciones ambientales y de promoción de los Derechos Humanos (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 2006; Greenpeace 2005).

Llaman la atención diversos aspectos en el caso de Pizano S.A. Por un lado, la capacidad, como la de otras empresas forestales, de mantener su viabilidad operativa en zonas de conflicto, lo que revela el desarrollo, tras varios años de experiencia, de cierta experticia en el manejo de actores armados y situaciones conflictivas. Uno de los indicadores de esta experticia es la comprensión de los ejecutivos de la empresa de la organización interna de las organizaciones armadas. “La guerrilla tiene dos niveles”, dice un representante de la empresa, “los grandes comandantes que dicen ‘no sembrar hasta que la compañía pague’ y los jefes intermedios (que dicen) ‘no tengo problema, quiero que funcione’” (entrevista con representante de empresa forestal, Bogotá, 27 de junio, 2006) porque, presumiblemente, al estar en contacto con las comunidades comprenden la importancia de la operación de la empresa para la economía local, de cuyo bienestar depende su legitimidad entre la población. Esta apreciación de las divisiones internas en las organizaciones armadas y de las oportunidades de negociar espacios y entendimientos que implica han revelado su importancia también en otros casos de empresas necesitadas de proteger su viabilidad y permanencia en contextos de alta conflictividad. Otro indicador de esta capacidad en el caso de Pizano es la dispersión territorial de las plantaciones como antídoto contra el riesgo: “Por eso tengo reforestación en muchas áreas: la actividad de la guerrilla no tiene capacidad de estar en todas partes”, dice un representante de la empresa (entrevista, Bogotá, 27 de junio, 2006). Finalmente, quizás el indicador más importante son los daños causados por el contexto conflictivo a la empresa: “No han hecho daño suficiente para afectar las operaciones”, dice un representante de la empresa (entrevista, Bogotá, 27 de junio, 2006).

Como en el caso de Smurfit Kappa Cartón de Colombia, las fuerzas oficiales no son consideradas como aliados permanentes. Con la salida de los paramilitares de la zona de Zambrano, el ejército declaró un área especial con un batallón de soldados campesinos. “A pesar de eso, a 10 kilómetros está la guerrilla. El ejército no garantiza absolutamente nada. No cuento con el ejército todo el tiempo”, dice un representante de la empresa (entrevista, Bogotá, 27 de junio, 2006).

¹³ Para información sobre el Forest Stewardship Council ver <http://www.fsc.org/en/>; para información sobre Smartwood, ver <http://www.rainforest-alliance.org/programs/forestry/smartwood/>

El Guásimo

Si Smurfit Kappa Cartón de Colombia y Pizano S.A. aparecen como curtidos en las lides de operar en contextos de conflicto armado, Reforestadora El Guásimo, una empresa del Grupo de Empresas de Antioquia (que es uno de los principales conglomerados económicos del país, ver Rettberg 2003) apenas de manera reciente se ha visto enfrentada a dinámicas de conflicto local. Recientemente ingresó a San Onofre (Sucre), “zona de fosas comunes” y en estado general de abandono por su situación de conflicto. La compañía se había demorado dos años en tomar la decisión de adquirir la finca en Sucre. “Vimos la evolución con las AUC (es decir, el proceso de desarme y desmovilización), y esperamos que eso se va a cuadrar”, dijo un representante de la empresa (entrevista, Bogotá, 28 de junio, 2006). Sin embargo, a la compañía “ya le llegó el mensaje (*de grupos como las FARC y el ELN*), ‘vamos a meterles la mano’” (entrevista, Bogotá, 28 de junio, 2006).

Según un representante de la empresa, en sus otras zonas de operación, principalmente en Antioquia y la zona andina, la empresa no había recibido presiones directas de los actores armados. Sólo cierta deserción laboral causada por las ganancias rápidas del raspado de hoja de coca. No en vano, la empresa declara que “nunca nos hemos visto bloqueados desde el punto de vista de operaciones” (entrevista, Bogotá, 28 de junio, 2006).

Siguiendo el ejemplo de otras empresas, la compañía se está preparando para la certificación. “Vamos para la certificación ISO 9000 en industrial, tenemos el ISO 9001 versión 2000 en vivero”, dice un representante de la empresa (entrevista, Bogotá, 28 de junio, 2006). Sin embargo, considera que la certificación internacional es “un premio para tirarse al mercado externo”, objetivo que comparte con las otras empresas¹⁴. Debido a su aparentemente reciente inauguración en la problemática del conflicto armado, El Guásimo aún no ofrece lecciones respecto al comportamiento de empresas en contextos de conflicto armado, pero será un caso al que convendrá hacerle seguimiento en los años próximos.

d. Sector forestal y construcción de paz: Un potencial por explorar

Ante la situación de conflicto social y armado que viven las empresas y ante la situación generalizada de abandono o de precariedad estatal en las zonas en que operan, éstas progresivamente han asumido roles cuasi-estatales en la provisión

¹⁴ Al respecto, un empresario forestal consultado opinó que el incentivo principal de los procesos de certificación no es el mercado externo sino las relaciones con las comunidades (stakeholders) domésticas.

de servicios de salud, educación y desarrollo de infraestructura¹⁵. Muchas de esas labores responden a motivaciones como la necesidad de generar viabilidad para las operaciones de las empresas, la necesidad de generar *good will* entre la población local hacia las empresas y la necesidad de contribuir a la calificación y la productividad de sus trabajadores. En muchos sentidos, estas acciones son potencialmente afines a la construcción de paz en sus zonas de influencia, pues buscan abordar lo que las empresas perciben como factores locales generadores de violencia y generar bases para un desarrollo (y una paz) estables, cuyos beneficios incluyen pero no se reducen a las empresas involucradas. Los párrafos siguientes describirán algunas de estas acciones.

El líder en trabajo social entre las empresas forestales es Smurfit Kappa Cartón de Colombia. No sólo desde la adopción de un código de ética hace más de treinta años y desde la creación de una fundación explícitamente dedicada a la inversión social, sino toda su política de contratación e inversión está permeada, por lo menos de acuerdo con la visión y misión explícita de la empresa, por una marcada atención al impacto y la inversión social. Según los informes anuales de inversión social (disponibles en <http://www.smurfit.com.co/>) los recursos destinados a la inversión social han ido en aumento. La fundación, que tiene su propio patrimonio y es dueña de acciones de la empresa (una ventaja que comparte con pocas otras entidades en el financieramente inestable panorama de la filantropía empresarial colombiana) desarrolla actividades para mejorar la calidad de vida de las comunidades ubicadas en áreas de influencia donde lleva a cabo su actividad industrial.

Desde el 2003 Smurfit lidera el Proyecto Ciudadano, una iniciativa que tiene como propósito formar en los jóvenes conciencia política para que estos generen propuestas y soluciones a problemas comunitarios (La República, 2006). Además, la fundación, sola o en alianza con entidades como el Comité de Cafeteros y secretarías de educación departamentales, impulsa programas educativos (para niños y adultos), invierte en la construcción y dotación de alojamientos, sala de informática y bibliotecas, en la generación de ingresos, en la gestión local y la participación ciudadana. Según revela la entidad en su reciente informe anual, se han hecho significativos esfuerzos para mejorar los procesos e incrementar la efectividad de los mismos. La Fundación Cartón de Colombia también fomenta que los jóvenes y sus familias encuentren en las fincas una alternativa económica viable que los motive a permanecer en el campo (Portafolio, 2006). No en vano, un representante de la empresa se enorgullece del récord social de la empresa. Y opina: “Cuando lleguen los coletazos (del postconflicto) creemos que van a ser más benévolos con nosotros por el trabajo de treinta años” (entrevista con representante de la empresa, junio, vía telefónica, 2006).

¹⁵ Ello ha sido documentado en varios casos en el nivel local y regional colombiano, ver Rettberg (2004).

En contraste con Smurfit, el trabajo de Pizano y El Guásimo es incipiente. En el caso de Pizano, la compañía ha ido evolucionando desde un modelo paternalista de asistencia social en sus zonas de operación hacia modelos que buscan la sostenibilidad, el empoderamiento y el compromiso de las comunidades locales. Muy en línea con modelos como el de la comercializadora de aceite de palma Indupalma S.A. en el Magdalena Medio (Rettberg 2004), la compañía inició en el 2002 una alianza productiva para la paz (dentro de la organización Alianza para la Paz del Fondo de Inversiones para la Paz del Plan Colombia, con fondo del Banco Interamericano) con cincuenta familias campesinas que participarían en el desarrollo de los cultivos forestales. El Departamento Nacional de Planeación, encargado de manejar los fondos del FIP, propuso que se plantaran 3.000 hectáreas de terreno de campesinos. Sin embargo, sólo se lograron plantar 400 hectáreas, en parte debido a la resistencia de la guerrilla, que vio en el programa una “estrategia para quedarse con las tierras” (entrevista con representante de empresa forestal, Bogotá, 27 de junio, 2006), argumento que la compañía rechaza por cuanto los contratos no toman la tierra como garantía.

En el caso de El Guásimo, en Victoria (Caldas) tiene una finca forestal en la que ha empleado desmovilizados, algunos de los cuales tienen cooperativas de trabajo. La empresa contempla la posibilidad de emplear a desmovilizados de AUC para buscar una salida productiva a las complejidades de la reinserción. Por otro lado, está considerando adelantar proyectos bajo el esquema de cuentas de participación. “Eso puede ser una vacuna social, un blindaje de seguridad para la zona”, opina un representante de la empresa (entrevista, Bogotá, 28 de junio, 2006).

e. En resumen: ¿En qué radica el potencial del sector forestal?

Diferentes factores operan en contra de que el sector forestal se vuelva socio de la construcción de paz en Colombia y que se dinamice más el sector. Por un lado, está acostumbrado a funcionar en condiciones de conflicto social y armado, incluso sin contar con el acompañamiento o la protección de las fuerzas oficiales. Como lo revelan los casos presentados aquí, se trata de empresas con décadas de experiencia en el manejo del conflicto local, de manera que lo normal para ellas, lo estándar, es operar en contextos conflictivos. Diferentes indicadores ilustran de qué maneras las empresas han adaptado su comportamiento a contextos de conflicto por medio de estrategias como la difusión de riesgos y las políticas sociales (“una vacuna social”, en palabras de un entrevistado). Esa inercia en la operación en condiciones adversas opera en contra de la disposición a buscar cambios significativos —por ejemplo procesos de superación del conflicto y construcción de paz— en sus terrenos operativos.

A ello contribuye una condición generalizada en las empresas, a saber que para ninguna de ellas la presión local ha excedido los límites de lo tolerable, como para considerar cambiar de negocio o de ubicación. En efecto, a pesar de operar en condiciones difíciles, varias figuran entre las grandes y más prósperas

empresas colombianas (es el caso de Smurfit, que, según la Revista Semana, se encuentra entre las cien empresas más grandes del país, Revista Semana, 2006), lo cual ilustra la complejidad de la relación entre conflicto armado y actividad empresarial, sobre todo porque no necesariamente las condiciones de conflicto armado imponen costos suficientes para limitar las posibilidades de crecimiento y generación de ingresos para las empresas. Al no parecer probable que se aumente la presión local sobre las empresas en el corto ni mediano plazo como para elevar también y de manera significativa sus costos de operación, se aleja la probabilidad de que adopten políticas de construcción de paz para generar viabilidad local a sus empresas. Finalmente, al tratarse de un sector tan pequeño en cuanto a su contribución al PIB nacional, su efecto jalonador sobre otros sectores puede ser limitado, dificultando su contribución a la creación de una masa crítica empresarial a nivel nacional que secunde la tarea de la construcción de paz.

Por otro lado, varios factores sugieren que, a pesar de la familiaridad con las condiciones del conflicto, estas empresas sí tienen un potencial significativo de vincularse a las acciones de construcción de paz. En primer lugar, las aún escasas pero significativas iniciativas de inversión social, en las que han explorado con combinaciones de paz y desarrollo local con énfasis en medio ambiente, muestran que existe un interés primario en seguir las desarrollando. Como resumió un representante de la empresa, “la conservación (o, para estos efectos, la construcción de paz) sin ingresos para la gente no se consigue” (entrevista con representante de empresa forestal, Bogotá, 27 de junio, 2006), reflejando la maduración del pensamiento empresarial. En ese mismo sentido, el interés de las empresas en las que se centró este estudio en participar activamente del proceso liderado por GTZ orientado a la elaboración de la publicación “Practica Empresarial Sensible al Conflicto: guía para la reforestación comercial en Colombia” (versión original elaborada por la ONG británica International Alert para la industria extractiva) es un paso importante y un indicador de una disposición favorable a emprender tareas afines a la construcción de paz.

En segundo lugar, similar al caso de otras industrias extractivas, como las petroleras, la actividad forestal, sobre todo el desarrollo de la base forestal, exige inversiones a largo plazo para rendir frutos, las plantaciones son difíciles de mover e implican una serie de *sunk costs* (o costos en los que ya se incurrió y que sólo podrán ser recuperados y rendir ganancias después de completar el ciclo total del proyecto). Como resultado, las empresas tienen un gran interés en quedarse, buscar viabilidad para las operaciones y desarrollan una resistencia a la adversidad. “Irnos es muy difícil”, dijo un representante de la empresa, “hemos dedicado 35 años a crear una base forestal” (entrevista, Bogotá, 27 de junio, 2006).

Por un lado, como ya se señaló arriba, ello opera en contra de una vinculación a la construcción de paz en tanto las empresas conocen la operación en la adversidad. Tomado a la inversa, sin embargo, el argumento también opera: dado que también

la construcción de paz es un emprendimiento riesgoso, las empresas no se van a asustar y abandonar los programas, acostumbradas como están al riesgo. Son empresas con perspectivas de largo plazo, con expectativas de rendimiento —de sus propias operaciones como de cualquier política de paz— también de largo plazo. Eso posiblemente los hace mejores y más duraderos socios de la construcción de paz que empresas que se desertan ante pequeñas o menores señales de riesgo.

En tercer lugar, las empresas forestales demandan grandes —aunque variables— cantidades de mano de obra, convirtiéndolas, como varias de ellas lo mencionaron, en posibles aliadas para ofrecer soluciones productivas a los miles de reinsertados de los procesos futuros y en marcha, muchos de los cuales ya se encuentran u operaban antes o son nativos de sus zonas de operaciones. En opinión de un representante de la empresa, un esquema de aprovechamiento gradual permitiría ofrecer trabajo de manera constante a estas personas (entrevista, Bogotá, 27 de junio, 2006).

En cuarto lugar, las empresas forestales tienen como zanahoria la expansión del sector hacia el mercado internacional, una tarea pendiente y altamente prometedora, como lo reveló la sección sobre el panorama económico del sector. La mirada cada vez más crítica de la comunidad internacional respecto al récord social y ambiental de las empresas, los exigentes procesos de certificación de buen comportamiento en marcha y, finalmente, las denuncias y críticas de las que han sido objeto, las empresas han sido, en ese sentido, un aliciente para incrementar la sensibilidad de las empresas a la crítica y un incentivo potencial importante para vincularse a programas de construcción de paz. Un representante de la empresa lo dijo de manera elocuente: la certificación internacional es “un premio para tirarse al mercado externo” (entrevista, Bogotá, 28 de junio, 2006), premio que, todos lo saben, tiene un costo.

Los párrafos anteriores revelan que, si bien existen factores adversos a la vinculación del sector forestal a la construcción de paz, también existen condiciones que no sólo lo motivarían a participar en esfuerzos tendientes en esa dirección sino que revelan que ya existe un capital del cual partir. Sin embargo, si para algo sirve la lección de cómo los sectores privados de otros países han apoyado (o no) la construcción de paz y dado que estamos hablando de empresas con un fuerte escudo y capacidad de resistencia ante los costos del conflicto, es claro que uno de los grandes retos para quienes quieran integrar sistemáticamente al sector forestal en esta enorme tarea es el de armar un muy buen argumento, que apele a sus intereses económicos y que tome en cuenta circunstancias locales particulares, para “venderlo” de manera acertada a estos importantes socios.

IV. Conclusiones

Este documento partió de un interés por documentar la relación entre sector forestal y conflicto armado en Colombia, apoyado en el significativo bagaje teórico de la literatura académica sobre economía política de los conflictos armados, construcción de paz y sector privado. Constató que el sector forestal colombiano es pequeño comparado con el potencial que ofrece el país, está poco integrado y opera en condiciones de informalidad y baja regulación y capacidad de implementación. Además, el documento encontró que el sector opera, con contadas excepciones, en zonas de gran conflictividad social y armada. Estas condiciones, sin embargo, no parecen haber afectado las operaciones de las empresas, generando una estable convivencia entre actividad forestal y conflicto en Colombia.

Al mismo tiempo, el documento aportó diversas razones por las cuales el sector forestal, precisamente por estar inmerso en el conflicto armado, así como por razones afines a sus propias posibilidades de desarrollo y expansión, puede volverse un socio de la construcción de paz en el nivel local colombiano. En efecto, la experiencia muestra que son los empresarios enfrentados a situaciones críticas en su entorno inmediato los más indicados aliados de identificar soluciones contextualmente específicas para superar los conflictos armados, y el sector forestal se encuentra entre ellos.

Para los interesados en inducir al sector forestal a la participación en proyectos relacionados con la construcción de paz, el reto radica en facilitar las condiciones para hacer más probable la participación del sector privado forestal en estas tareas. Ello abarca desde el desarrollo de un argumento económico específico para el sector, haciendo uso estratégico de los “ganchos” de la futura inserción internacional y de los requisitos (de productividad y calidad, pero también de responsabilidad social) que ella implica en la actualidad, hasta el fomento de otras condiciones como la estabilidad de las políticas públicas para el sector y para la construcción de la paz, en general, que otorguen credibilidad y visión de largo plazo a los proyectos emprendidos.

V. Bibliografía consultada

Acosta, Israel. (2004). “Informe nacional Colombia. Estudio de tendencias y perspectivas del Sector Forestal en América Latina documento de trabajo” Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (CONIF), Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, Roma.

Albuquerque, María, Brustlein, Violette, Waniez, Phillipe. (2000). “Perspectivas y restricciones al desarrollo sustentable de la producción forestal en América Latina” Naciones Unidas, CEPAL, Santiago de Chile.

Agencia Española de Cooperación Internacional, <http://www.aeci.es>

Aldana, Camilo. (2004). “Sector Forestal Colombiano, Fuente de vida trabajo y bienestar” Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (CONIF), Bogotá, Colombia.

Amnistía Internacional. (2003). “Continúa el Proceso Kimberley: a pesar de los progresos, quedan cuestiones importantes por resolver”, Comunicado de prensa, mayo, <http://web.amnesty.org/library/Index/ESLIOR800092003?open&of=ESL-398>

Andrade, Germán. (2004). Selvas sin ley. Conflicto, drogas y globalización, en Cárdenas, Martha y Rodríguez, Manuel (ed.) “Guerra, sociedad y Medio Ambiente” Foro Nacional Ambiental, Fundación Alejandro Ángel Escobar, Universidad de los Andes - Facultad de Administración, Ecofondo, Tropenbos Internacional Colombia, GTZ, Friedrich Ebert Stiftung en Colombia – Fescol, Bogotá.

Azam, J.-P.; D. Bevan; P. Collier; S. Dercon; J. Gunning y S. Pradhan. (1994). “Some Economic Consequences of the Transition from Civil War to Peace”. Washington D.C.: World Bank.

Bejarano, A. Echandía, C. Escobedo R. Queruz, E. (1997). "Colombia: Inseguridad, Violencia y Desempeño económico en las áreas rurales." Bogotá, Fonade, Universidad Externado de Colombia.

Bennett, Juliette. (2001). "Businesses in Zones of Conflict: The Role of the Multinational in Promoting Regional Stability." New York: International Peace Forum/World Monitors Inc., preparado para el Global Compact Policy Dialogue de la Organización de las Naciones Unidas.

Bendaña, Alejandro. (2002). "What Kind of Peace is Being Built? Critical Assessments from the South", Discussion Paper, prepared on the Occasion of the Tenth Anniversary of Agenda For Peace for the International Development Research Centre (IDRC), Ottawa, Canadá, octubre.

Berdal, Mats y David Malone (eds.). (2000). "Greed and Grievance: Economic Agendas in Civil Wars", Boulder: Lynne Rienner Publishers.

Burger, Dietrich; Hess, Jürgen; Lang, Barbara. (2005). "Forest certification: an innovative instrument in the service of sustainable development?" GTZ. Programmbüro Sozial - und Ökostandards. Eschborn; Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Bonn.

Camacho, Hugo. (2004). Impacto del doblamiento sobre los grupos indígenas del trapecio Amazónico Colombiano, en Defensoría del Pueblo (et. al.) "Control Social y Coordinación: Un Camino Hacia La Sostenibilidad Amazónica: caso maderas del Trapecio Amazónico". Bogotá.

Cárdenas, Martha, Rodríguez, Manuel. (Editores) (2004). "Guerra, sociedad y medio ambiente" Foro Nacional Ambiental, Fundación Alejandro Ángel Escobar, Universidad de los Andes- Facultad de Administración, Ecofondo, Tropenbos Internacional Colombia, GTZ, Friedrich Ebert Stiftung en Colombia – Fescol, Bogotá.

Castaño, Guillermo. (2006) "Cómo afecta a las comunidades campesinas y a la biodiversidad la industria papelera en la zona Andina". Revista Semillas, No 20.

Center for Public Integrity. (2002). "Making a Killing: The Business of War". http://www.public-i.org/dtaweb/icij_bow.asp.

Cilliers, Jakkie y Dietrich, Christian (eds.). (2000). "Angola's War Economy: The Role of Oil and Diamonds". Pretoria: Institute for Security Studies.

Coatsworth, John. (1998). "Latin America and the World Economy since 1800", Cambridge: Harvard University Press.

Collier, Paul. (2000). "Economic Causes of Civil Conflict and their Implications for Policy", World Bank.

Collier, Paul, Hoeffler, Anke (2000). "Greed and Grievance in Civil War", Policy Research Working Paper 2355, The World Bank, Development Research Group.

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. "¿Ecocidio certificado? Pizano S.A, en el territorio del Bajo Atrato (Chocó)" Revista Semillas, Número 26.

Davies, Robert. (2000). "Business: Why Do Private Companies Have a Role in Conflict Prevention?", presentación en la Conferencia Wilton Park sobre "Principios humanitarios y actores no estatales", en cooperación con el Centro Henry Dunant de Ginebra y el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, 9 de febrero.

Departamento Nacional de Planeación. (1996). "Política de Bosques", Documento Conpes 2834, Bogotá, enero.

de Soysa, Indra. (2000). "The Resource Curse: Are Civil Wars Driven by Rapacity or Paucity?", en Mats Berdal y David Malone (eds.), Greed and Grievance: Economic Agendas in Civil Wars, Boulder: Lynne Rienner Publishers, Inc., pp.113-135.

Díaz, Ana María y Sánchez, Fabio. (2004). A geography of illicit crops (Coca Leaf) and armed conflict in Colombia, Documento de Trabajo No. 1, Centro de Desarrollo Económico – Universidad de los Andes.

Doyle, Michael W. y Sambanis, Nicholas. (2000). "International Peacebuilding: A Theoretical and Quantitative Analysis", American Political Science Review, vol. 94, no. 4, diciembre.

Echandía, C. (2000). "El conflicto armado colombiano en los años noventa: Cambios en las estrategias y efectos económicos." En: Revista Colombia Internacional 49-50, Bogotá, Centro de Estudios Internacionales, Departamento de Ciencia Política, PG 117- 134.

Echandía, C. (1997). "Expansión territorial de la guerrilla colombiana: geografía, economía y violencia." Bogotá, Documento Cede, Programa de Estudios sobre Seguridad, Justicia y Violencia. Universidad de los Andes.

El Tiempo, "Los aserradores están confinados en Riosucio (Chocó) tras el ataque de las FARC" julio 14, http://www.eltiempo.com/conflicto/noticias/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-16925.html

Espinal, Carlos, Martínez, Héctor, González, Elkin. (2005). "Características y estructura del sector forestal- madera- muebles en Colombia" Documento de trabajo No. 95, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio Agrocadenas Colombia. <http://www.agrocadenas.gov.co>

European Commission. (2003). "Communication from the European Commission to the Council and the European Parliament: FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) – Proposal for an EU Action Plan", http://europa.eu.int/eurlex/en/com/cnc/2003/com2003_0251en01.pdf

FAO. (2005). "Situación de los bosques del mundo", Roma.

Galtung, Johann. (1996). "Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilisation", London, Sage.

de Gamboa, Camila. (2005). "Justicia transicional: dilemas y remedios para lidiar con el pasado", en Revista de Estudios Socio-Jurídicos, Facultad de Jurisprudencia – Grupo de Investigaciones Socio – Jurídicas Carlos Holguín Holguín, Vol 7. Número especial, pp. 21-40.

Gerson Allan & Colletta Nat J. (2002). "Privatizing Peace: From Conflict to Security", NY: Transnational Publishers.

Gerson, Allan. (2001). "Peace Building: The Private Sector's Role". American Journal of International Law, 95(1):102-119.

Global Witness. (2006). "Reforming the DRC Diamond Sector" junio.

_____. (2004). "Dangerous Liaisons", diciembre.

_____. (2004). "Taking a Cut", noviembre.

_____. (2003). "The Usual Suspects", marzo.

_____. (2001). "Chainsaw Speaks Louder", mayo.

_____. (2002). "All the Presidents Men", marzo.

_____. (2000). "Conflict Diamonds: Possibilities for the Identification, Certification, and Control of Diamonds", 10 de mayo.

_____. (1999). "A Crude Awakening: The Role of the Oil and Banking Industries in Angola's Civil War and the Plunder of State Assets", diciembre.

_____. (1999). "A Crude Awakening", diciembre.

_____. (1998). "A Rough Trade: The Role of Companies and Governments in the Angolan Conflict", diciembre.

González, Juan. (1998). La naturaleza en disputa y la naturaleza de la disputa, en Ecofondo, TM editores, "La manzana de la discordia: debate sobre la naturaleza en disputa", Bogotá, octubre.

GTZ Colombia, <http://www.gtz.de/en/aktuell/636.htm>

Guáqueta, Alexandra. (2005). "Desmovilización y reinserción en El Salvador: Lecciones para Colombia", Fundación Ideas para la Paz (FIP), Bogotá.

Guáqueta, Alexandra. (2003). "Dimensiones políticas y económicas del conflicto armado en Colombia: Anotaciones teóricas y empíricas", en Colombia Internacional. No.55, pp.19-36.

Gurr, Ted Robert, Marshall, Monty G. y Khosla, Deepa. (2003). "Peace and Conflict 2003: A Global Survey of Armed Conflicts, Self-determination Movements and Democracy", College Park, M.D.: Center for International Development and Conflict Management (CIDCM), University of Maryland.

Haufler, Virginia. (2001). "Is There a Role for Business in Conflict Management". In Crocker, Chester A., Hampson, Fen Osler y Aall, Pamela (eds.). Turbulent Peace: The Challenges of Managing International Conflict. Washington, United States Institute of Peace.

IEPRI. (2006). Nuestra Guerra sin Nombre: Transformaciones del conflicto en Colombia, IEPRI y Norma, Bogotá.

Ignatieff, Michael. (2000). "Balkan Physics", Virtual War. Kosovo and Beyond, New York: Picador USA.

International Alert. (2006). "Local Business, Local Peace: The Peacebuilding Potential of the Domestic Private Sector", London: International Alert.

International Crisis Group. (2006). "Colombia: Hacia la Paz y la Justicia?", Informe sobre América Latina, No 16, marzo.

_____. (2003). "Colombia: Negociar con los paramilitares", Informe sobre América Latina, No 5, septiembre.

_____. (2002). "Colombia: Prospects for Peace with ELN", Latin America Report, No 2, octubre.

International Consortium of Investigative Journalists.(2002). “Privatizing Combat, the New World Order”. Center for Public Integrity.

Keen, David. (2001). “War and Peace: What’s the Difference?” In Adebajo, A.; Sriram, C. L. (eds.) *Managing Armed Conflicts in the 21st Century*. Frank Cass, pp. 1-22.

Keen, David. (2000). “War, Crime and Access to Resources”. In Väyrynen, E. Wayne Nafziger; F. Stewart (eds.) *War, Hunger and Displacement: The Origins of Humanitarian Emergencies*, Oxford University Press.

Keen, David. (1998). “The Economic Functions of Violence in Civil Wars”. Oxford University Press for the International Institute for Strategic Studies.

Latorre, Emilio. (1996). “Empresa y Medio Ambiente en Colombia”, Fescol, Cerec, Bogotá.

Lilly, Damian. (2000). “The Privatization of Security and Peacebuilding: A Framework for Action”. London: International Alert.

Lund, Michael. (2002). “What Kind of Peace is Being Built? Taking Stock of Peacebuilding and Charting Next Steps”, Discussion Paper, prepared on the Occasion of the Tenth Anniversary of Agenda For Peace for the International Development Research Centre (IDRC), Ottawa, Canadá.

Madera, Plácido (2006). “La problemática territorial de las regiones de Timba y el Alto Naya (Cauca). Smurfit Cartón de Colombia”. *Revista Semillas*, Número 20.

Mack, Andrew. (2002). “The Private Sector and Conflict – Global Compact Policy Dialogue”, Harvard Program on Humanitarian Policy and Conflict Research.

McNeely, Jeffrey. (2002). “Overview A – Biodiversity, Conflict and Tropical Forests” En: Matthew Richard, Halle, Mark, Switzer, Jason. “Conserving the peace: Resources, Livelihoods and Security”, IISD, IUCN, CEESP.
http://www.iisd.org/pdf/2002/envsec_conserving_peace.pdf

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio del Medio Ambiente, Mincomex Colombia, Mindesarrollo, Departamento Nacional de Planeación. (2000). “Plan Nacional de Desarrollo Forestal”, Bogotá, diciembre.

Ministerio del Medio Ambiente, Departamento Nacional de Planeación. (1995). “Política Nacional de Biodiversidad”, Bogotá.

Mogollón, José, Maldonado, Manuel, Uribe, Eduardo, (2006). “Asuntos esenciales para comunicarle al Señor Presidente en relación con la Ley Forestal”, Foro

Nacional Ambiental, Policy Paper 10. Fescol, Universidad de los Andes, Facultad de Administración, Fundación Natura, GTZ, Ecofondo, WWF.
<http://www.fescol.org.co/Polycypapertodos.html>

Naciones Unidas, “Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”. http://www.cinu.org.mx/temas/des_sost.htm

Nasi, Carlo, Rettberg, Angelika. (2005). “Los estudios sobre conflicto armado y paz: un campo en evolución permanente”, Colombia Internacional, No 62, Julio – Diciembre 2005, pp 64- 85.

Nelson, Jane, The Prince of Wales Business Leaders Forum. (2000). “The Business of Peace: The private sector as a partner in conflict prevention and resolution”, International Alert, Council on Economic Priorities.

Núñez, Georgina. (2003). “La responsabilidad social corporativa en un marco de desarrollo sostenible”, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, CEPAL / Sociedad Alemana de Cooperación (GTZ), Santiago de Chile.

Obregón, Carolina. (2006) “Pizano S.A 70 años construyendo historia”, Revista M&M, <http://www.revista-mm.com/rev49/empresa.pdf>

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1992). “An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peacekeeping”. Report of the Secretary-General, United Nations GA and SC, A/47/277, S/24111, 17 June; disponible en: <http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html>.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Departamento Forestal, <http://www.fao.org/forestry/index.jsp>

Orozco, Iván. (2005). “Sobre los límites de la conciencia humanitaria: dilemas de la paz y la justicia en América Latina”, Universidad de los Andes CESO, Editorial Temis, Bogotá.

Pacofor Colombia, FAO, Holanda, Corpocaldas, Carder, CRQ, Cortolima, Fondo para la Acción Ambiental. (2002). “Memorias. II Encuentro Internacional: Desarrollo Forestal Participativo”, Ibagué, Colombia.

Pizano S.A, <http://www.pizano.com.co/home.html>

Rainforest Alliance, <http://rainforests.mongabay.com/20colombia.htm>

Rettberg, Angelika. (2006). “Buscar la paz en medio del conflicto: un propósito que no da tregua - Un inventario de iniciativas de paz en Colombia (1990s hasta

hoy”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) – Universidad de los Andes, Colección Ediciones Especiales.

Rettberg, Angelika. (2006). “Local businesses’ role in formal peace negotiations”, en *International Alert, Local Business, Local Peace: The Peacebuilding Potential of the Domestic Private Sector*, London: International Alert.

Rettberg, Angelika. (2005). (compiladora). “Entre el perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la justicia transicional”, Bogotá: International Development Research Centre (IDRC)—Ediciones Uniandes.

Rettberg, Angelika. (en imprenta). “Business and Peace in Colombia: Responses, Challenges, and Achievements”, en Virginia M. Bouvier (ed.), *Colombia: Building Peace in a Time of War*, United States Institute of Peace (USIP).

Rettberg, Angelika. (2004). “Business-Led Peacebuilding in Colombia: Future or Fad for a Country in Crisis”, Working Paper No.56, Crisis States Programme, diciembre.
<http://www.crisisstates.com/download/wp/wp56.pdf>

Rettberg, Angelika. (2003). “Diseñar el futuro: Una revisión de los dilemas de la construcción de paz para el post conflicto”. En *Revista de Estudios Sociales – Universidad de los Andes*, #15, junio, pp.15-28.

Reforestadora de la Costa S.A. (Refocosta), <http://www.refocosta.com>

Revista M & M, <http://www.revista-mm.com/>

Revista Semana. (2006). “Las 100 empresas más grandes de Colombia” http://portal2.semana.com/wf_InfoArticuloArchivado.aspx?IdArt=94090

Revista Semillas, <http://www.semillas.org.co/>

Rodríguez, Manuel, Espinoza, Guillermo. (2002). “Gestión ambiental en América Latina y el Caribe. Evolución, tendencias y principales prácticas”, Banco Interamericano de Desarrollo, Departamento de Desarrollo Sostenible, División de Medio Ambiente.

Roper, John y Roberts, Ralph. (1999). “Asuntos forestales: Deforestación: Bosques tropicales en disminución”, Agencia Canadiense Desarrollo Internacional, Québec, Canadá.

Rosenberg, Tina (2002). “The year in ideas: Peace through embargo”, *New York Times Magazine*; Dec 15, pg 108.

Rubio, M. (1999). "Crimen e impunidad: precisiones sobre la violencia". Bogotá, TM Editores, Cede.

Secretaría Pro Tempore del Tratado de Cooperación Amazónica, Consejo Centroamericano de Bosques y Áreas Protegidas, FAO. (1998). "Segunda reunión de inversión privada en el sector forestal de las Americas", Memoria de la reunión realizada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 09 al 11 de diciembre de 1997.

Streed, Eric, USAID Forests Team (2006). "Overview of Forests Conflict and USAID's work on the issue", USAID, <http://research.yale.edu/gisf/assets/pdf/tfd/logging/bpfrca/Schweithelm-1.pdf>

Smurfit Kappa Cartón de Colombia, <http://www.smurfit.com.co/>

United States Agency for International Development (USAID), <http://www.usaid.gov/>

Thomson, Jamie, Kanaan, Ramzy. "Conflict Timber: Dimensions of the problem in Asia and Africa", Volume I, Synthesis Report. USAID, ARD.

Tschirgi, Necla. (2003). "Peacebuilding as the Link between Security and Development: Is the Window of Opportunity Closing?", New York: International Peace Academy, December.

United Nations (2003) <http://www.un.org/>

USAID. "Cambodia: The human impact of forest conflict", http://www.ardinc.com/upload/photos/270Cambodia-Human_Impact.pdf

USAID. (2006). "Conflict over natural resources at the community level in Nepal, including its relationship to armed conflict", <http://www.forestconflict.com/documents/Nepal%20NatResConflictReport.pdf>

USAID. (2006). "Forest Conflict in Asia: How big is the problem?" http://biofor.ardinc.com/upload/photos/270Forest_Conflict_in_Asia_3-15.pdf

Varón, Luisa (2004). "Reforestación, inversión con buena cosecha", Revista M&M, <http://www.revista-mm.com/rev24/refores.htm>

Vicepresidencia de la República, "Geografía de la confrontación y la violencia", Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/imagenes/el00_06.pdf

Wenger Andreas & Möckli Daniel. (2003). "Conflict Prevention: The Untapped Potential of the Business Sector", Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.

Wood, Elisabeth. (2001). "Forging Democracy from Below: Insurgent Transitions in South Africa and El Salvador", Cambridge University Press: London.

World Bank, Private Sector Development in Conflict-Affected Countries, <http://rru.worldbank.org/PapersLinks/ReadingList.aspx?TopicId=80>

World Commission on Forests and Sustainable Development (1999). "Our Forests our Future" Summary Report, Edited by Ajit Krishnaswamy and Arthur Hanson, <http://www.iisd.org/pdf/wcfsdsummary.pdf>

Yara, Andrés, Roa Tatiana. (2002). "Van muriendo los bosques. Deuda ecológica de la industria maderera y forestal", Censat Agua Viva, Foe (Colombia). <http://www.sur.iucn.org/ces/documentos/documentos/810.pdf>

_____, (2006). "Ventas de Cartón de Colombia subieron 7 por ciento a marzo", La República, junio 6.

_____, (1996). "Alerta Verde", Revista Semana, edición 737, julio 15.

En diferentes países del mundo, el manejo y la explotación de los bosques se inscribe en conflictos sociales y armados. No en vano, la "madera de los conflictos" (o conflict timber, el término con el que se hace referencia a la problemática en inglés), constituye hoy una de las preocupaciones de la creciente literatura que se ocupa de entender cómo diferentes recursos naturales alimentan los conflictos armados domésticos de la actualidad. Colombia no escapa a esta dinámica. Zonas de explotación maderera han sido también focos de conflictos sociales y de actividad armada, en las que se entretajan variables como la pobreza, la falta de presencia estatal, el deterioro ambiental y la competencia entre actores armados por la hegemonía local.

Este documento vuelca nuestra mirada sobre las empresas forestales. ¿En qué medida pueden ser aliadas de la construcción de paz en Colombia? El documento encuentra que estas empresas, con contadas excepciones, operan en zonas de gran conflictividad social y armada. Estas condiciones, sin embargo, no parecen haber afectado significativamente las operaciones de las empresas, generando una estable convivencia entre actividad forestal y conflicto en Colombia.

Al mismo tiempo, el documento aporta diversas razones por las cuales el sector forestal, precisamente por estar inmerso en el conflicto armado, así como por razones afines a sus propias perspectivas de desarrollo y expansión, puede volverse un socio de la construcción de paz en el nivel local colombiano. En efecto, como lo sugiere la experiencia internacional, son los empresarios enfrentados a situaciones críticas en su entorno inmediato los más indicados aliados de identificar soluciones contextualmente específicas para superar los conflictos armados. El sector forestal se encuentra entre ellos.

El documento concluye que para los interesados en inducir al sector forestal a la participación en proyectos relacionados con la construcción de paz, el reto radica en desarrollar el argumento económico específico haciendo uso estratégico de los "ganchos" de la futura inserción internacional y de los requisitos (de productividad y calidad, pero también de responsabilidad social) que ella implica en la actualidad.

Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

Cooperación Técnica Alemana
Programa Ambiental
Carrera 13 No. 97-51, Oficina 302
A.A. 89836
Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: ++57-1-6361114
Fax: ++57-1-6351552
E-mail: gtz-kolumbien@gtz.de

